

Diciembre 5 de 1946 (Tarde)

64ª REUNION — Continuación de la 16ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del doctor Ricardo C. Guardo y señores Silverio Pontieri
y Héctor Sustaita Seeber

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

Prosecretario: señor Eduardo Sánchez Terrero

DIPUTADOS PRESENTES:

Albrien, Oscar E.
Alvarez, Juan Daniel
Alvarez, Néstor
Alvarez Pereyra, Manuel
Alvarez Pérez, Vicente
Alvarez Vocos, Enrique
Allub, Rosendo
Aráoz, Ricardo E.
Arévalo Cabeza, Jabel
Argaña, José M.
Arlas, José
Ayala López Torres, Francisco
Bagnasco, Vicente
Balbin, Ricardo
Barreiro, Carmelo
Benítez, Antonio J.
Bertini, Amadeo
Bonazzola, Romeo E.
Boullosa, Emilio M.
Braga, Juan Carlos
Busaniche, Julio J.
Cámara, Guillermo F.
Cámpora, Héctor J.
Camus, Eloy P.
Candiotti, Alberto M.
Casal, Raúl M.
Casas Noblega, Armando
Cleve, Ernesto
Cooke, John William
Córdova, J. Salvador
Corvalán, Luciano R.
Cufre, Orlando H.
Curchod, Amado J.
Decker, Rodolfo A.
Degreef, Juan Ramón
De la Torre, Juan
Del Carril, Emilio Donato
Del Mazo, Gabriel
Dellepiane, Luis

Díaz Colodrero, Justo
Díaz de Vivar, Joaquín
Díaz, Manuel M.
Dri, Roberto
Dufau, Juan Adolfo
Errecart, Juan A.
Fajre, José Benito
Fernández, Hernán S.
Ferrando, Manuel P.
Ferrer, Modesto
Fregosi, Luis J.
Frondizi, Arturo
Galvagni, Saverio M.
Garauso, Bernardino Hipólito
Garay, Marcelino S.
García, Manuel
García Quiroga, Alejandro
Giménez Vargas, Francisco
Guardo, Ricardo C.
Gnillet, César Joaquín
Klix López, Guillermo
Lara, Ricardo
Laschar, Guillermo F.
Lencinas, José R.
Letamendi, Balbino (h.)
Licéaga, Félix J.
López Serrot, Oscar
Mac Ray, Luis R.
Malecek, José Enrique
Mantaras, Manuel J.
Maríaletgui, Ansel S.
Martínez Guerrero, Guillermo
Martínez Luque, Enrique
Mendiondo, F. Daniel
Messina, Humberto
Montes de Oca, Carlos
Montiel, Alcides Esteban
Moreno, José Luis
Mossot Iturraspe, Mario
Mujica, Rodolfo
Noriega, Juan J.
Obeid, Leonardo

Orozco, Modesto V.
Osinalde, Rafael
Otonello, Benito J.
Pasquini, José P. D.
Pastor, Reynaldo A.
Peña Guzmán, Solano
Perea, Pedro J.
Pérez de la Torre, Horacio
Petrucci, Miguel
Pirani, Antonio S.
Pomar, Gregorio
Pontieri, Silverio
Pueyrredón, Horacio Honorio
Raña, Eduardo Antonio
Ravignani, Emilio
Reyes, Cipriano
Reynés, Leandro R.
Rodríguez de la Torre, Raúl
Rodríguez, Nerio M.
Rojas, Absalón
Rojas, Nerio
Rossi, José
Rougier, Valerio S.
Rubino, Sidney Nicolás
Rumbo, Eduardo I.
Sammartino, Ernesto E.
Santander, Silvano
Saravia, Teodoro Sotero
Sarmiento, Manuel
Sarraute, José Roberto
Sobral, Antonio
Sorgentini, Mario Alberto
Sustaita Seeber, Héctor
Tesorieri, José V.
Toro, Ricardo
Uranga, Raúl L.
Vanasco, Julio A.
Velloso Colombres, Manuel F.
Vergara, Amado
Villafañe, José María
Visca, José Emilio
Vischi, Albino

Zanoni, Pedro P.
Zara, Edmundo Leopoldo
Zinny, Mario

AUSENTES, CON LICENCIA:

Andreotti, Antonio
Antille, Diógenes C.
Ayerbe, Lázaro Balbino
Baulina, Angel V.
Beretta, Eduardo
Brugnerotto, Juan N. D.
Colom, Eduardo
Cuminetti Correa, Alcides D.
Fernández, Baltasar S.
Gerické, Carlos Gustavo
González Funes, Tomás
Graña Etcheverry, Manuel
Ianspolsky, Angel
Jofré, Hernán R.
Kees, Gaspar
Marotta, José
Palacio, Ernesto
Polizzi, Juan
Ripetto, Agustín
Ricagno, Roberto
Rodríguez, Manuel
San Millán, Ricardo Antonio
Tejada, Ramón Washington
Tommasi, Victorio M.
Urdapilleta, Oscar C.

AUSENTES, CON AVISO:

Bustos Fierro, Raúl
Calcagno, Alfredo D.
Maineri, D. Jacinto
Ponce, Angel L.
Solaret, Emilio
Valdez, Celestino

SUMARIO

1.—Continúa la consideración del despacho de la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes en el proyecto de ratificación legislativa de decretos referentes a régimen bancario y organización económica. Se sanciona.

2.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación Agraria en el proyecto de resolución

de pedido de informes al Poder Ejecutivo acerca de ventas efectuadas por la Junta Reguladora de la Producción Agrícola.

3.—Apéndice:
Inserciones.

—En Buenos Aires, a los cinco días del mes de diciembre de 1946, siendo las 16:

1

REGIMEN BANCARIO Y ORGANIZACION ECONOMICA

Sr. Presidente (Guardo). — Continúa la sesión.

Está en consideración el despacho de la Comisión Especial Revisora de Decretos Leyes en el proyecto de ratificación legislativa de decretos referentes a régimen bancario y organización económica; y está en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital, quien dispone de quince minutos para completar su exposición.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Ravignani. — En momentos de pasar a cuarto intermedio analizaba la forma en que se podría afrontar el problema inmigratorio en presencia de disposiciones incorporadas al régimen bancario que estamos considerando, y destacaba la ausencia de noticias para la opinión pública en circunstancias en que parece que se está preparando la salida de la embajada especial a fin de realizar un vasto programa con respecto a la política inmigratoria, al punto de querer desplazar una masa de cuatro millones de inmigrantes, que, según referencias periódicas, entraría al país a razón de 30.000 por mes.

Estos comentarios han tenido eco en la opinión pública y son los únicos que podemos utilizar en estos instantes. El diario «La Prensa» del día 4 del mes en curso se refiere a la «constitución de una delegación presidida por un sacerdote con carácter de embajador extraordinario y ministro plenipotenciario, lo que hace presumir la posibilidad de la concertación de algunos acuerdos con países extranjeros, delegación que integrará con representantes del Banco Central y funcionarios de la cancillería». Ya se conoce quién ha de ser el funcionario del ministerio, pero ignoramos quiénes son los representantes del Banco Central, que precisamente es una de las instituciones que debe coordinar toda esta acción en materia de política inmigratoria. No se conoce tampoco qué preferencias se dará a los inmigrantes en cuanto a sus aptitudes para el trabajo, a sus inclinaciones individuales, a su capacidad técnica o posesión de algunos recursos pecuniarios. No se conoce tampoco si habrá o no protección directa o indirecta para su transporte y radicación definitiva.

Pero hay algo más grave, señor presidente, que es necesario tener en cuenta en esta materia. En el plan quinquenal, en uno de los proyectos a consideración del Congreso, se enuncian bases para la colonización y la inmigración. Yo no acostumbro nunca a persona-

lizar, ni me agrada hacerlo, sobre todo cuando debemos atender los graves problemas del gobierno. No discuto que el jefe de la embajada pertenezca a una orden, la salesiana, que ha civilizado y civiliza las regiones patagónicas antes de que fuera allí la acción oficial. Conozco esa obra, que ha contado en algunas oportunidades con mi simpatía personal, pero convendrán los señores diputados en que el problema es más vasto de lo que se piensa. En realidad, hay que considerar todo el país, y como decía en la primera parte de mi exposición, aquí tengo el plano de la República relativo al fenómeno demográfico de despoblación y de concentración de la masa de población, pobre en el sentido del número, que se calcula que apenas alcanzará a 14.000.000 de habitantes, como cálculo poscensal de un censo que ya ha pasado a la historia.

Me permito hacer notar un tanto la improvisación que existe en este asunto en aspectos graves de toda esta organización bancaria.

¿Se ha pensado, acaso, cuáles son realmente los problemas de las zonas que hay que fomentar? ¿Se ha pensado, acaso, en las posibilidades de arraigo? Treinta mil inmigrantes en el país supongamos, ¿dónde serán destinados? ¿Qué requerimientos existen? ¿Se ha pensado en el problema de la vivienda, tan escasa en este momento? ¿Y se ha pensado en algo más grave? Aquí se habla mucho de miles de millones de superávit de nuestra economía, pero yo no he visto aún un cálculo oficial aproximado en base a elementos que deben obrar en las oficinas del Estado acerca de cuáles son los requerimientos de los equipos industriales del país. Algunos centros de investigación económica hacen ascender las necesidades de reposición de material técnico de nuestras fábricas, de ampliación de esas mismas fábricas, de inversiones industriales, a sumas astronómicas. Se calcula que lo necesario para reponer y ampliar nuestros equipos industriales alcanzará a una suma que oscila entre los 4.000 y 5.000.000.000 de pesos, exclusivamente para la industria privada, sin incluir, desde luego, lo que necesita la industria del Estado, cuando por ejemplo Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que tiene que renovar parte de su equipo y ampliarlo, para que la explotación petrolífera pueda bastar a las necesidades del consumo.

Ya que hablamos de reactivación económica, yo pregunto ¿con qué va a hacer frente la industria privada en esta situación de actividad industrial? Creo que hay que tener un poco de prudencia, que hay que concluir con esta especie de hiperestesia de los números financieros, creyendo que todo lo que se ha congelado y después se ha activado en el país está ya definitivamente invertido. Hay que hacer reservas fundamentales porque de no

ser así nos encontraremos con un balance de pagos tan desfavorable en el que el país, en vez de ser acreedor como lo es en estos instantes, se hallará en la situación realmente peligrosa de deudor.

Por último, creo que es necesario que discutamos un poco el traslado de los grupos étnicos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué masa de población se va a traer: latina, sajona, eslava? Es decir elementos étnicos en gran cantidad tendrán que ingresar al país. Y por qué no decirlo, señor presidente, cuidemos un poco en esta descomposición de ideas en que se encuentra Europa, en esta especie de disociación revolucionaria que está obstaculizando la celebración definitiva de la paz del mundo, cuidemos un poco las ideologías para que no se nos traiga una inmigración tan seleccionada, que venga a revivir entre nosotros problemas de índole política que pueda constituir una perturbación en el desenvolvimiento de nuestra vida interna. (¡Muy bien! ¡Muy bien!)

La magnitud de los problemas que involucra este conjunto de decretos leyes salta a la vista; su trascendencia es indudable, porque no solamente afecta al orden interno sino que también va a afectar al orden internacional.

Las modificaciones introducidas a la ley 12.155 y la nacionalización del Banco Central, importan un contralor de las inversiones del dinero particular porque el Estado, en última síntesis, por vía del Banco Central, se va a convertir en el garante de todos los depósitos entregados por los particulares a los bancos; pero a su turno, el Banco Central —lo dice precisamente en una de sus disposiciones— tendrá facultades amplias para resolver, como caso de excepción, las variantes propias de cada banco en materia de inversiones y de efectivos líquidos.

Yo, señor presidente, le tengo mucho miedo a la intervención del Estado, no al Estado en abstracto sino al que se concreta en las oficinas públicas, al que se traduce en las reparticiones administrativas, a este Estado macrocéfalo que se convierte en un peligro tremendo porque muchas veces es imposible que los jefes, los ministros, el presidente, puedan tener el contralor hasta de los últimos rincones en que se desenvuelven oficinas que manejan cuantiosos intereses, no sólo del fisco sino también de los particulares.

Hay que evitar este crecimiento excesivo, este Estado dominador que mata toda posible iniciativa individual.

Todo refluye en los bancos oficiales. El Banco Central llega a ser el tesorero del sistema bancario que se propugna; el Banco de la Nación pierde su autonomía anterior que le dió su grandeza que hizo al bien del país. Además, desaparece la iniciativa del Ministerio de Hacienda.

Veo, también, aquí algunas omisiones que francamente no me satisfacen en el gobierno del banco. El otro día, al informar el despacho de la mayoría el señor diputado Benítez, hablaba de una reforma respecto de la composición de un directorio. Al principio creí que se trataba del Banco de Crédito Industrial. Pero no era así, señor presidente. Y me permito llamar la atención de la Honorable Cámara de cómo se va a componer el directorio del Banco de Crédito Industrial, de manera que francamente no le encuentro una razón fundamental y más bien la considero peligrosa.

Excluyendo al presidente y vicepresidente, de los ocho vocales del directorio, cinco serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Banco Central de la República, el que consultará para ello, conforme con la reglamentación que se dicte, a los sectores servidos por el Banco Industrial; los tres restantes serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta directa de los ministerios de Guerra y de Marina y de la Secretaría de Aeronáutica.

¿Esta es toda la economía del país? ¿Acaso están representados todos los intereses? Resulta que el Ministerio de Agricultura está desapareciendo, por arte de encantamiento, de todas esas actividades fundamentales. Yo creo que estamos dando importancia excesiva a algunas reparticiones y anulando a otras; y ese prurito puede, en un momento dado, ser peligroso. Considero que este directorio está mal compuesto, porque faltan en él elementos del Estado que son fundamentales, como asesores para el gobierno de la economía del país.

Pero lo más bravo es el cambio de política en materia hipotecaria. Ya se ha referido el señor Peña Guzmán a este respecto.

Quiero terminar mi breve exposición diciendo, como juicio definitivo —y ojalá para bien del país no se ratifique mi inferencia—, que en todo este planeo corre un sentido negativo que yo llamaría de imprevisión. Es un planeo de crisis, pero de crisis de progreso; y afirmo que toda esta estructuración está basada en un período transitorio de la economía del mundo y de la economía nacional.

Considero que no hay previsión suficiente de gobierno, que estamos construyendo sobre una serie económica que fatalmente deberá cambiar en el reordenamiento del mundo. Me parece que estamos obrando con un optimismo excesivo si se piensa —y lo veremos cuando nos ocupemos del plan quinquenal— que una de las bases de sustentación está fundada en la acción del Instituto de Promoción del Intercambio y en los remanentes que puedan quedar de la intromisión del Estado como intermediario entre el productor y el consumidor en el orden interno y en el orden externo. Afirmo que transformar al Estado en un intermediario de comercio es

una operación muy aleatoria. Cuando esa base de sustentación desaparezca, cuando la economía tome su curso, cuando la producción del mundo se encarrile, cuando lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la producción agrícola y hasta con la ganadera ocurra en los otros países de Europa, que empezaron a trabajar intensamente, ¿sobre qué bases de sustentación —pregunto— se van a encontrar los recursos para planificar esta economía?

Afirmo que esto es en cierto modo un juego de arte de encantamiento; que en todo lo planeado falta una base sólida y fundamental de previsión, no de un año o dos, sino de cinco o diez considerando las curvas de ascenso y descenso por las que va a pasar la economía mundial. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Pastor. — Señor presidente: los graves y complejos aspectos que ofrece a la discusión el asunto sobre el cual delibera la Cámara, han sido ya estudiados en detalle por los oradores que me han precedido. Por otra parte, el turno en que me toca usar de la palabra no me permitiría hacer un desarrollo completo del tema sin incurrir forzosamente en supererogaciones que no tendrían finalidad práctica y que contribuirían a que la Cámara perdiera su tiempo sin mayor beneficio.

No obstante, debo expresar los motivos por los cuales los miembros integrantes de mi sector votaremos en contra de la sanción de estas leyes, fundándonos en consideraciones de carácter general que, aunque tengan esa característica, indudablemente son emanadas del análisis integral de este asunto que, como acabo de decir, ya ha sido realizado en gran parte con acopio de antecedentes y con evidente erudición por los señores diputados que han hablado antes que el que está en el uso de la palabra en este momento. Es que este asunto tiene aspectos de una gravedad tan marcada, de una trascendencia tan fundamental para el porvenir económico y político de la Nación y de una consecuencia tan funesta y evidente en relación al futuro desarrollo industrial y económico del país, que es imposible dejar de señalarlos, para que surja con claridad meridiana cuáles son las razones fundamentales que algunos diputados tenemos para oponernos a la sanción de este cuerpo de leyes, sin que ello signifique negar que hay disposiciones, leyes, creaciones dentro del cuerpo, que, imbuídas de otro espíritu, animadas por un propósito más claro de una política económica definitivamente democrática, no tendríamos inconveniente ninguno en subscribirlas.

No quiero, desde ya, hacer el cargo de que toda esta construcción, toda esta concepción, está imbuída de cierto espíritu totalitario porque no deseo pronunciar palabras agraviantes

para los hombres que pueden haber trabajado de buena fe en la confección de este cuerpo de leyes. Pero sí creo, profunda y sinceramente, que en este caso ocurre lo que ya han denunciado en estos últimos tiempos algunos economistas europeos: que hay ideas de esa estirpe, antecedentes de esos sistemas, que afloran en las legislaciones de América, donde pareciera haber hombres que, seducidos por un tecnicismo extraordinario, se empeñaran en hacer precisamente lo que su razón y su conciencia rechazarían, es decir, se empeñaran en crear organizaciones, en establecer legislaciones, en marcar directivas que, sin tener el propósito de llevarnos a una política de tipo totalitario, tienen las consecuencias de llevarnos a esa misma política.

Destaco que toda esta legislación, destinada a dar un nuevo sistema bancario a la República, a establecer un nuevo sistema de economía nacional, destinada también a destruir ciertos principios básicos de la organización económica y política de la República, es eminentemente contraria y atentatoria al régimen federal de gobierno, que establece nuestra Constitución como única forma de gobierno, y que se basa en el respeto de las autonomías provinciales, autonomías que, como he dicho en otra oportunidad, tienen un origen jurídico e histórico, que estamos obligados a respetar y resguardar, si queremos que la Constitución nacional siga imperando en toda la vida del país, en forma permanente, y velando el progreso y el engrandecimiento de la Nación.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Silverio Pontieri.

No es, señores diputados, que trate de sostener una doctrina artificial y que pretenda, desde ningún punto de vista, mantener un ataque enardecido a todo lo que no responde a nuestro sentimiento autonómico; no es que desee exagerar el espíritu localista, que como una consecuencia natural de nacimiento de los Estados provinciales y de sus anhelos de mantener el gobierno propio vive latente en el espíritu y en la conciencia de los pueblos del interior. No es eso. Creo que hay construcciones dentro de la Constitución nacional, creo que hay principios jurídicos que son intangibles; creo que la Nación tiene la obligación de defender permanentemente la organización federal del país y creo que las provincias contribuyen a esa finalidad, defendiendo el ejercicio de todas aquellas facultades que jamás delegaron en el gobierno de la Nación, de todos aquellos derechos que emanan de pactos preexistentes que sirvieron de base para la organización de la República y que son evidentemente fundamento

jurídico de esos principios que las provincias defendieron con su sangre y que la Nación aceptó para consolidar la unidad nacional.

Ya que en sesiones anteriores pude hablar de la raíz histórica de ese espíritu que priva en los Estados provinciales, no habría hoy, para ratificarlo y para fundarlo en una razón de justicia, más que recorrer las disposiciones concordantes que la Constitución contiene y que concurren a formar la estructura jurídica de lo que llamamos federalismo.

Ved, por ejemplo, el artículo 39 que empieza por dar una capital a la República, estableciendo que ella sólo podrá funcionar en un territorio que sea cedido por ley especial por las provincias a la Nación; ved el artículo 13, que establece que podrán levantarse nuevas provincias en el territorio de la República, a base del desmembramiento de las existentes, pero siempre que por ley de sus legislaturas —es decir, por propia voluntad— autoricen la formación de una nueva provincia, lo que significa resguardar la entidad territorio de las provincias y reconocerlo como esencial del federalismo; ved el inciso 11 del artículo 67, que autoriza a la Nación a dictar los códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, estableciendo expresa y terminantemente que éstos no podrán alterar la jurisdicción de las provincias, y que las autoridades de aplicación serán federales o provinciales, según que las personas o las cosas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones. Recordad que el inciso 12 del mismo artículo establece que el Congreso puede reglar el comercio internacional y el de las provincias entre sí, es decir, que la Constitución tiene una previsión destinada a precaver y evitar no sólo la diversidad de legislaciones de las provincias, sino también los conflictos que puedan producirse entre el Estado nacional y los locales o entre estos últimos en forma que puedan lesionar la unidad autonómica e histórica de cada una de las provincias.

Es también en el mismo artículo 67, inciso 27, que se dispone que la Nación puede establecer y organizar fortalezas, arsenales, almacenes u otros establecimientos de utilidad nacional, en cualquier parte del territorio; pero cuando lo haga en las provincias es indispensable que previamente trate con ellas la compra de los lugares necesarios y que la Legislatura provincial sancione las leyes autorizando la cesión de ese territorio a la Nación.

Finalmente, para no citar más disposiciones, quiero recordar la de los artículos 106 y 107, que establecen que cada provincia tiene la facultad invulnerable de dictar su propia constitución, de organizar sus instituciones y de realizar pactos con las demás provincias o tratados parciales con fines de administración de

justicia, de interés económico, de trabajo, de utilidad común, etcétera.

Y, por último, el artículo 108, que reconoce a las provincias la facultad indiscutida de crear bancos, prohibiéndoseles, única y exclusivamente, que ellos tengan la facultad de emitir moneda.

Entonces, señores diputados, ¿cómo no resistir toda legislación que ataque estos principios, reduciendo a las provincias en sus posibilidades de ejercer ampliamente las facultades que les son propias y de realizar todos aquellos actos que no solamente no han delegado al poder federal, sino que la Constitución federal les reconoce expresamente como derechos propios?

Ya se ha destacado en esta Cámara que la ley que consideramos ataca abiertamente estas facultades de las provincias, las limita, las restringe y, en ciertos casos, las hace desaparecer totalmente como atributo esencial del gobierno y de las instituciones provinciales.

Pero, además de esta observación, que se refiere al resguardo del régimen federal de nuestra forma de gobierno, que, como he dicho, la Constitución nacional establece que es la única forma que puede haber, hay otras razones también de orden fundamental.

Se crea un régimen de unificación y control total y absoluto en el uso del crédito. Se dan facultades a una institución federal para que rija toda la vida económica y todas las actividades privadas del país. Se ponen en sus manos resortes esenciales para estimular las industrias y los capitales, que ese organismo, con criterio propio, crea que deban estimularse, y al mismo tiempo, para que cierre las posibilidades a aquellos capitales e industrias que también, según su propio criterio, puedan ser perjudiciales para otros intereses del país.

¿Pero se ha pensado, acaso, que en materia de industrias, de comercio, de actividad y desarrollo de capitales, las provincias tienen derecho a tener un criterio propio sobre las conveniencias de cada una de ellas? ¿No se ha pensado, acaso, que cuando una provincia necesita estimular el trabajo en su territorio, es esencial que lo haga a base de la atracción de industrias y de la promoción del trabajo, y que entonces está en su perfecto y legítimo derecho sancionar todas aquellas leyes que concurren a ese propósito esencial, destinado a preparar su grandeza y prosperidad? Acaso nos olvidamos que hace mucho tiempo el país está realizando una legislación unitaria que no siempre contempla los intereses y los anhelos de las provincias del interior y que, muchas veces, ha adolecido —tal vez por la propia configuración de la organización de este Parlamento— de los graves inconvenientes de que a provincias del interior se les ha impuesto la obligación de aceptar leyes dictadas con criterio litoralense o de aceptar leyes dictadas con el criterio que

surgía de la contemplación de grandes y poderosas industrias y que no eran al mismo tiempo de protección de las pequeñas industrias del interior.

Esta legislación tiene, también, otro inconveniente: permite el uso ilimitado y discrecional de los fondos públicos, cuyo origen y cuya extracción no han sido controlados ni autorizados por el Congreso, que es en donde tienen voz los Estados particulares, como si pudiéramos seguir sosteniendo que toda la materia impositiva, que todos los recursos que integran las rentas nacionales, no se deben, en una o en otra forma, al trabajo, al esfuerzo y a la producción nacional, en la que participan todos los hombres, todas las ciudades y todos los pueblos de la República.

Muchas veces se ha escuchado hablar de las rentas aduaneras como si fueran un patrimonio exclusivo o un producto exclusivo del esfuerzo y de la actividad de esta gran Capital, y como si se desconociera la incidencia que esas rentas aduaneras tienen necesariamente en el consumo que se corre hacia el interior y en las corrientes de producción que afluyen desde el interior a la capital de la República. Y esto es tanto más grave, cuanto se traduce en una política —lo estamos viendo en los estudios que aparecen a diario en revistas especializadas y en artículos de nuestra prensa— que permite ocultar sigilosamente al país la política económica deficitaria en que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, al extremo de que ya los términos del tecnicismo financiero se confunden con la jerga común destinada a sentar hechos que, en el fondo, son la contradicción de la realidad, pero que se presentan como un maravilloso espejismo para la opinión nacional; al extremo de que pueda hablarse hoy de riqueza acumulada del tesoro de la Nación, olvidándose que si esa riqueza no proviene de las rentas que han sido autorizadas y sancionadas por el Congreso, y que si el país está viviendo con un presupuesto que arroja un déficit de varios centenares de millones, no puede hablarse de que el tesoro está en una holgura extraordinaria y que permite comprometer todos los gastos que se le ocurran al gobierno, a las instituciones de crédito o a los organismos técnicos que ha creado para asesoramiento.

Toda esta política —es necesario decirlo de una vez por todas para que afrontemos el estudio y la contemplación de este vasto problema— tiene una resultante que en este momento es dolorosa para la vida del país, y que refleja en una serie de acontecimientos y de fenómenos que gravitan pesadamente sobre la vida de todos los argentinos. Toda esta política estimula y agrava en una forma permanente, y sin que sea posible prever dónde está el fin del fenómeno, a la inflación monetaria en el país. Nunca la moneda argentina ha llegado a un nivel más alto de depreciación que

el que tiene en este momento. El peso argentino sufre actualmente, según los estudios que se realizan y las publicaciones que aparecen, una depreciación que ya llega al 46 por ciento, es decir, que estamos casi en la mitad del valor del peso argentino. Y por eso es que tenemos que pagar todos los artículos de consumo y todos los artículos de primera necesidad al doble o al triple de su valor. Es una consecuencia real de la depreciación real de la moneda.

Trae también otras consecuencias que va a ser necesario considerar y poner de relieve dentro de muy poco: el mercado negro, que hoy está en un auge fantástico en el país, que hoy, como un pulpo con múltiples tentáculos, abarca todas las actividades del comercio y la industria, y que es la base a que necesariamente deben someterse y a la que deben recurrir los hombres que se encuentran apremiados por determinadas adquisiciones que le son indispensables para la vida y para la industria. Es una consecuencia de todo este sistema. No digo que no la podamos evitar, pero creo que es necesario que dentro de breve término nos avoquemos al estudio de cómo es posible que el gobierno de la Nación, provisto de buenas leyes dadas por este Congreso, sin prevenciones de ningún género, pueda luchar y destruir a ese enemigo de la tranquilidad y del bienestar general de la sociedad argentina.

Yo no creo que haya complicaciones en ese asunto que vayan más allá de las que son necesarias, posibles o explicables para que viva el mercado negro, y que son las complicaciones que el propio mercado negro crea, no sólo para subsistir, sino para vigorizarse y subsistir el mayor tiempo posible, gravitando en la vida económica del país. Pero todos los señores diputados convendrán en que es un fenómeno que ya aflora a la superficie, que está en los mercados del país, en las calles, en los campos, en todas partes, ejerciendo una presión económica que es fatal para los intereses generales de la Nación y para los propios intereses fiscales.

Sr. Klix López. — ¿Me permite, señor diputado?

Quiero expresar que con la sanción de estas leyes se están legalizando actos ya consumados, pero que no están cerradas las puertas para que cualquiera de los señores diputados que tenga mejores ideas pueda subsanar un error u omisión que se haya deslizado.

Sr. Pastor. — A eso aspiramos todos los diputados, a tomar esa línea que nos permita zanjar diferencias de criterio y colocarnos en un mismo nivel para servir al país. Por eso, me he adelantado a decir que no hago imputaciones, que no hago cargos, que no creo que haya ciudadanos que desde la función pública, o fuera de ella, se pongan al servicio de causas que son

atentatorias para el bienestar general del país, pero si señalo que existen males que es necesario combatir, y que esos males emergen en gran parte del sistema económico que está viviendo el país desde hace mucho tiempo, de esa economía dirigida; del racionamiento mantenido a veces con razón y otras sin ella, para muchos elementos de trabajo; del comando único en materia de transacciones comerciales internacionales. Es una consecuencia de todo ese sistema, que no sólo perturba la vida económica, agravándola con la influencia del mercado negro, sino en cuanto no se han restablecido todavía las corrientes comerciales de allende los mares, a pesar de que hay problemas gravísimos para la economía y la producción, uno de ellos por el que claman todos los hombres de trabajo del agro argentino: la falta de maquinarias que han sufrido un desgaste que hace imposible o antieconómica su utilización. Sin embargo, no se ve por ninguna parte la solución próxima de ese problema.

Sr. Benítez. — ¿Tiene el señor diputado las maquinarias para traerlas?

Sr. Pastor. — No las tengo; como no tengo en mis manos los resortes para hacer las investigaciones correspondientes ni para hacer los tratados de comercio que solucionan la situación.

Sr. Benítez. — Casualmente, esta política tiende a que se logre tener en las manos los resortes necesarios para poner al país en condiciones de resolver ese problema.

Sr. Pastor. — Sé que hace pocos días, entre las medidas aduaneras que se han tomado, hay algunas que inciden precisamente sobre esos elementos de trabajo, y que en vez de facilitar la introducción al país la alejan por mucho tiempo.

Sr. Benítez. — No, señor diputado. Todos los esfuerzos en nuestras relaciones comerciales internacionales han tendido a conseguir maquinarias. Y cuando los partidos que representan los señores diputados luchaban contra el gobierno defacto —en esos momentos en que el gobierno defacto no quería entregar nuestro trigo, sino a cambio de maquinarias—, aplaudían a los que no querían entregar maquinarias. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Pontieri). — Ha terminado el plazo de que dispone el señor diputado por San Luis para su exposición.

Sr. Pastor. — Estoy hablando en nombre del sector político.

Sr. Presidente (Pontieri). — Continúa con la palabra el señor diputado.

Sr. Pastor. — Siempre se plantea ese dilema. No quiero hacer discusión retrospectiva sobre el asunto. Quiero despertar inquietudes y provocar soluciones; quiero recordar a los señores diputados que, cuando hay problemas graves de gobierno que es necesario resolver para el bienestar y progreso del país, todos los ciudadanos

tienen la obligación y la responsabilidad de promover esos problemas. Pero sólo los gobiernos tienen la responsabilidad por no resolverlos.

Sr. Benítez. — Lástima es que durante toda la época anterior a la asunción de este gobierno, los partidos que estaban en contra nuestra no pensaban lo que ahora dice el señor diputado. Aplaudían a las naciones que se negaban a entregarnos maquinarias, pensando que, no entregándolas, nos iban a hundir y hundían al país.

Sr. Pastor. — Estábamos en contra de la dictadura...

Sr. Benítez. — En favor de gente que se negaba a suministrarnos maquinarias para impedir que el país pudiera resurgir económicamente.

Sr. Pastor. — Estábamos en contra del nacionalismo económico y reaccionario.

Sr. Benítez. — Aplaudían a los que pedían la aplicación de sanciones económicas a nuestro país; y en su afán de querernos hundir a nosotros, propendían a hundir al país.

Sr. Pastor. — Estábamos en desacuerdo con aquella nota de un ex ministro de Marina, que expresaba todo lo contrario de lo que dice el señor diputado.

Sr. Benítez. — Eso es muy viejo. Estoy aludiendo al año 1945.

Sr. Pastor. — Estábamos en contra de los mensajes confidenciales a los industriales extranjeros sobre problemas nacionales; estamos en contra de la intervención extranjera en los problemas internos y de nuestra intervención en los problemas internos del extranjero.

Sr. Braga. — En cambio, si antes no se hacían confidencias...

Sr. Pastor. — Podemos disentir en nuestros criterios, podemos disentir en nuestras afirmaciones, sin necesidad, sin embargo, de hacernos recriminaciones...

Sr. Benítez. — Las recriminaciones las hacen ustedes.

Sr. Pastor. — El señor diputado puede demostrarme que estoy equivocado...

Sr. Benítez. — En eso estaba.

Sr. Pastor. — ...y como me jacto de ser por lo menos medianamente inteligente, voy a absorber las observaciones que me haga el señor diputado y las voy a recoger con buena voluntad, para que si es el caso rectificar mi criterio, me rectificaré, y si es el caso de refirmarlo, así lo haré.

Sr. Benítez. — En la próxima campaña política no se usarán esos argumentos.

Sr. Pastor. — Continúo, señor presidente.

Tenemos otra objeción fundamental que hacer a todo este cuerpo de legislación que se pretende sancionar en este momento. Creemos que es la expresión máxima de la planificación en materia económica y financiera, y estamos profundamente en contra de todo lo que sea planifica-

ción en nuestro país y en nuestro gobierno. La planificación tiene un origen y concepto que es profundamente antagónico con el origen y el concepto democrático de nuestras instituciones y de la vida de la República.

La planificación fué el eje central de la política realizada en todos los países totalitarios. Fué la razón suprema que invocaron para hacer imperar la ley omnimoda de un estado tiránico sobre la voluntad soberana de un pueblo democrático. La planificación sigue siendo en los anales de la vida política y parlamentaria una mala palabra que continúan repudiando terminantemente los espíritus más selectos que alumbran al mundo con la luz de su inteligencia y de su capacidad.

Yo quiero recordar —porque oí con cierta sorpresa en la sesión de ayer que un señor diputado afirmó categórica y terminantemente que vamos hacia la planificación integral de todas las actividades del país— que es necesario no confundir lo que es el pensamiento de gobierno de los hombres, lo que pueden ser sus programas y planes de acción, con lo que significa la aplicación del principio de planificación en la vida económica, política y jurídica de un país.

Un notable economista, Hayek, en su reciente libro *El Camino de la Serritud*, autor que es a la vez catedrático distinguido de las universidades de Londres y de Viena, nos da magníficos conceptos sobre lo que es la planificación y sobre los peligros del trasplante de esta idea, de este sistema, a los gobiernos de América. Dice Hayek, refiriéndose a las horas del nacimiento del nazismo: «Hay muchos actos que entonces se miraban como típicamente alemanes y que ahora son igualmente comunes en América y en Inglaterra, y muchos síntomas que se dirigen a un ulterior desarrollo en la misma dirección. La creciente veneración por el Estado, la aceptación fatalista de tendencias inevitables, el entusiasmo por la organización de todos, que ahora se llama planeamiento», o planificación o planes quinquenales, o que se llama nueva conciencia en marcha; al fin y al cabo, todo es lo mismo y arranca de un origen común: la voluntad dictatorial de un Estado omnipotente.

Sr. Orozco. — Siempre será mejor que el fraude patriótico.

Sr. Pastor. — Y agrega más adelante: «Mientras el Estado planifica para favorecer la competencia, o entra a actuar donde es imposible que la competencia funcione, no hay objeción; pero creo que todas las demás formas de actividad gubernamental en asuntos económicos son altamente peligrosas. Hay muchos que equivocadamente creen que nuestra vida económica debiera ser conscientemente dirigida, que debiéramos substituir por el planeamiento económico el sistema de la libre competencia.

Pero —advierte más adelante— nuestra libertad de elegir una sociedad competitiva reside en el hecho de que si una persona se rehusa a satisfacer nuestros deseos, podemos dirigirnos a otras, pero si nos encontramos frente a un monopolio, estamos a su merced, y una autoridad que dirigiera la totalidad del sistema económico sería el monopolio más poderoso que pueda imaginarse.»

Este es el concepto de toda planificación, que sigue subsistiendo, no obstante la dura experiencia realizada en los pueblos europeos. Este es el concepto que nos permite afirmar que la planificación es el principio de la creación de un poder extraordinario depositado en manos de un hombre, y que el día que ese poder extraordinario se encuentre en manos de un ciudadano que lo ejerza con toda la violencia de que puede ser capaz un hombre que se cree provisto de poderes y facultades extraordinarios, ese día, como dice Francisco Cambó, la libertad ha de estar en peligro y el tirano estará detrás de la puerta de la República.

La planificación trae como consecuencia necesaria, con la creación de un organismo directivo para la economía y para la industria, que la iniciativa privada se encuentre trabada y en peligro y que carezca de horizontes y de posibilidades. Nadie estará seguro de prosperar con ninguna actividad ni con ninguna industria. Todo el mundo estará pendiente de la actividad del Estado absorbente, director de toda la actividad económica del país.

Y he aquí que es imposible negar la similitud entre un régimen de completa planificación con aquel sistema ruso que pone en manos del Estado el monopolio absoluto de la producción, de la comercialización y de la distribución de la riqueza. No es necesario llegar a los extremos a que ha llegado Rusia de poner también en manos del Estado la distribución del trabajo. Basta con que se pretenda que el Estado dirija en forma omnimoda y con carácter de monopolio la comercialización de todos los productos y la distribución de todas las riquezas de la Nación, apartando de ella la parte que cree debe pertenecerle al hombre que ha trabajado, el que ha expuesto capital, el que se ha sacrificado, y la parte que debe corresponder al Estado, nada más que por el simple hecho de intervenir en la distribución de lo que ese hombre ha producido y de dirigir esa distribución en el sentido en que el Estado cree que es conveniente y necesaria.

Finalmente, para no abundar en mayores consideraciones, ya que he expuesto los puntos fundamentales de nuestra discrepancia, estamos también en contra de este sistema, porque creemos que con él se crean organismos e instituciones estatales que están llamados a substituir en gran parte la acción de este Congreso; y hay facultades que pertenecen a este Congreso; por

disposiciones constitucionales y por la naturaleza de la función legislativa, que, sin embargo, puede ser ejercida por organismos extraños al Congreso sin que éste tenga la oportunidad de intervenir y de dictar las leyes que considere necesarias o convenientes.

Señores diputados: Saldrá este cuerpo de legislación, que ha sido analizado profundamente por los representantes de la oposición, pero saldrá sin voto de los diputados de los sectores de la oposición, es decir, que saldrá bajo la responsabilidad exclusiva del sector mayoritario. Este hecho, que es de una evidencia meridiana, ha de servir para llamar a la reflexión a los señores diputados, a fin de que no se coloquen en la situación del convoy que emprende vertiginosa carrera, sin mirar su conductor las curvas del camino, sin apercebirse de la proximidad de los paragolpes. No estamos en contra ni queremos combatir al conductor de ese convoy, porque todos vamos en él, y la muerte del conductor sería la muerte de todos nosotros.

Pero queremos que ese convoy no llegue a perfilarse en la lejanía del tiempo y de los acontecimientos como la bicicleta que toma una peligrosa cuesta abajo y que se ve forzada a seguir corriendo siempre, porque su detención rompe la ley del equilibrio y la somete al golpe de la ley de gravedad.

Queremos que el convoy sea manejado por mano firme y segura, no porque temamos a la muerte —como decía un señor diputado recién—, sino porque en ese convoy va todo el acervo de la Nación, va la Nación misma; y el día que el maquinista pierda el camino y no controle los frenos, no se estrellará solamente él, sino que, con él, se estrellará la Nación entera.

Nada más. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Cooke. — Señor presidente: todos los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra han hecho referencia a la magna trascendencia del voto que va a dar la Cámara. A la brillante exposición del señor miembro informante de la mayoría, reforzada por argumentos de nuestro compañero de sector Klix López, siguió la descarga de metralla de una crítica que ha tenido por objeto destruir el sistema y la gestión financiera revolucionaria.

Creo que casi todas esas críticas pueden ser rebatidas victoriosamente y he de irlas contestando en la forma y medida que el tiempo lo permita, luego de haber fijado la posición de este bloque, en cuanto a la verdadera importancia que para nosotros tiene el problema.

Iba a hablar en primer término de nuestra concepción del Estado en lo referente a su intervención en la economía. No lo hago, porque resulta evidente que en esta materia los sec-

tores de la oposición no han presentado un frente unido. Desde la tardía revalidación de antiguos conceptos del Estado gendarme, hasta la exposición de ideas politicoeconómicas de carácter avanzado, la oposición ha sustentado criterios dispares y antitéticos. Solamente una cosa quiero destacar: de ninguna manera creemos que esta mayor ingerencia del Estado en la economía pueda traer aparejada la pérdida del ideal democrático y cristiano de que el valor final en la tierra es el hombre, y el principio del respeto a la personalidad humana. Por ello, creemos que la intervención debe ir acentuándose en un país de economía semicolonial como el nuestro, para lograr que la idea de la recuperación económica integral abandone el estrecho límite de las exposiciones dialécticas, para ir tomando realidad en las concreciones legislativas.

El proceso de «concentración bancaria» en todos los países ha sido paralelo al de la «concentración económica e industrial». El librecambio, al exacerbar la competencia comercial e industrial, dió lugar al monopolio. La historia bancaria ha marchado en igual sentido; no son fenómenos propiamente paralelos como especifica Vico, sino que se entrelazan, siendo corriente que grupos bancarios tengan a su vera monopolios de carácter industrial y comercial.

Es por ese entrelazamiento que el Estado, a medida que ha ido interviniendo en la economía, ha debido también intervenir en la dirección de los bancos.

Podría tal vez sostenerse un juego más libre del negocio bancario siempre que nuestra economía no fuese lo que es. Pido a la Honorable Cámara que se haga un planteo de lo que es nuestra economía, sin exagerar los tintes sombríos, pero crudo y realista. Somos un país de economía semicolonial, dirigida desde el extranjero, y campo propicio para el juego de todos los monopolios. Frente a ello, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Cruzarse de brazos y esperar que empiecen a actuar los famosos «automatismos reguladores», último bastión de los defensores del libre cambio?

Veamos el panorama de la política en materia económica. Este país ha tenido gobernantes buenos y malos. Jamás hago en este recinto condenas retrospectivas a mandatarios determinados, que podrían ser injustas; pero sí puedo afirmar que no ha existido en nuestro país una clase dirigente con concepto cabal de su rol, que permitiese la formación de la conciencia nacional en materia económica.

Se ha exacerbado el espíritu nacionalista en otros aspectos; pero se ha dejado el problema económico como si sólo fuese su subtema propio de disquisiciones académicas. Entonces han actuado las fuerzas imperialistas, que no sólo se han servido de nuestra riqueza —eso lo po-

demos reponer—, sino que han producido un efecto más perjudicial: han fomentado que el país permaneciera en el estado de un simple productor agrícola-ganadero. Y es así cómo han subvenido a sus necesidades de materias primas, a los propósitos de sus industrias, a la inversión de sus capitales y, a menudo, a la dirección de nuestros servicios públicos.

La conciencia pública nacional no ha podido formarse en materia económica, principalmente por la ineptitud y la inercia de la clase gobernante, que ha seguido líneas hedónicas de conducta, fomentada por la prédica de los traidores nativos. Afloró por un momento en la época de Yrigoyen, sin llegar a cristalizar; recién ahora, tiene vigencia en el escenario político argentino. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Este ordenamiento es una expresión de esa conciencia económica, y por eso es que hubiésemos deseado que nos acompañasen los votos de todos los diputados de esta Cámara, sin discriminación de sector.

Esto es lo fundamental: no se trata de un simple cambio en la forma de la organización financiera, de una variación en nuestro sistema funcional o administrativo, sino que para nosotros representa una de las fases principales de la transición de nuestra economía colonial hacia una economía propia. Es la oportunidad que hemos soñado, de iniciar el reintegro de nuestra riqueza a su verdadero dueño: el pueblo de la República. Este es nuestro concepto sobre la proyección, magnitud y trascendencia de estas leyes.

Afirmamos sin jactancia, serenamente, que ellas marcan el comienzo de una política financiera, económica y social basada en auténticas fuerzas nacionales.

Este es el principio de la lucha, que va a ser ardua porque existen fuerzas muy poderosas empeñadas en retrotraernos a nuestra antigua calidad de colonia. No hemos de permitir el renacimiento de la antigua conciencia colonial basada en el entreguismo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Voy a rebatir las principales críticas que se han hecho al sistema del banco; pero antes, he de detenerme en una de las críticas, porque ha sido común a todos los señores diputados.

Nos han dicho que estamos concediendo facultades extraordinarias; nos han dicho que estamos dando plenos poderes, nos han dicho que estamos creando la dictadura financiera y económica. Ya he fijado nuestro concepto de Estado democrático y no hay peligro que nos vayamos a encandilar con las soluciones aparentemente fáciles de las teorías totalitarias, porque nosotros no venimos ni de un golpe militar triunfador, ni de un «fraude patriótico», sino que hemos sido ungidos por el voto de nuestros conciudadanos; pero tampoco vamos a bailar al compás de la marchita de los argu-

mentos de la «dictadura económica». La dictadura ha existido en este país, y la tenían grupos foráneos de concentración capitalista; otra dictadura ha sido la de los magos y los prestidigitadores de las finanzas y de la economía, que, cuando terminó la función, nos habían dejado una economía endeudada, de la cual ni siquiera se habían tomado el trabajo de hacer un inventario para saber cuál era nuestro haber patrimonial.

La historia se repite. Hacia el año 1889 teníamos un ferrocarril construido con capitales argentinos y con el esfuerzo argentino: el Ferrocarril Oeste. Era nuestro, y debió seguir siéndolo. Pero se dijo que iba a constituir un medio de acción política y hasta se afirmó, por un ministro del Poder Ejecutivo, que iba a significar la entrega de demasiados controles a una sola mano, y ese ferrocarril dejó de ser nuestro. En el año 1917 el presidente Yrigoyen mandó un proyecto de ley creando el Banco de la República, con las mismas características del actual Banco Central. No consiguió sanción favorable, ni de la comisión del Senado, porque en cuanto se lanzó el proyecto, y no obstante una magnífica defensa que hiciera de él el ministro Salaberry, surgieron tiradores desde todos los ángulos de la actividad nacional para decir que eso iba a conducir a la dictadura financiera y en definitiva a la ruina económica. La única voz que no se alzó ni pudo oírse fue la de la clase humilde y necesitada, que no tuvo en esos momentos medios adecuados de expresión. Entonces, se dijo que Yrigoyen quería facultades extraordinarias en materia financiera. ¡Ojalá se las hubiesen dado!

Pero nos ha servido de lección. Nos ha servido para aprender a no asustarnos de las palabras, que no nos van a correr con la terminología. Ya lo dijeron entonces, y a causa de ello nos ciñeron más la cadena opresora.

Entrando ya en concreto al terreno de la gestión financiera del gobierno, sostengo que el sistema de ordenamiento de leyes bancarias permitirá el incremento de nuestra riqueza; que las últimas medidas del gobierno: repatriación de la deuda externa, conversión de la deuda y rescate de cédulas hipotecarias, han de resultar favorables y ya están produciendo sus resultados. Afirmando que el gobierno ha combatido eficazmente la inflación. He de entrar al detalle de cada aspecto porque quiero ahuyentar el fantasma de la bancarrota que, según los señores diputados de la oposición, nos está esperando en pasos perdidos, para enrostrarnos que estas leyes han traído la miseria a la República.

Sr. Santander. — ¿Me permite, señor diputado?

No somos nosotros quienes anunciamos una situación de esa magnitud, sino el presidente de la República en la exposición de motivos del plan quinquenal.

Sr. Rumbo. — Es la naturaleza misma de la estructura...

Sr. Santander. — Es el presidente de la República, que anuncia ya la desvalorización de la moneda por un lado, y por otro lado, que se ha de operar el período de deflación.

Sr. Cooke. — El señor presidente de la República se ha limitado, simplemente, no a hacer una predicción, sino a marcar un hecho fatal e ineludible, como es el de un ciclo de depresión del cual no hay actuación posible de ningún gobierno, que nos pueda salvar.

Sr. Santander. — ¿Y con respecto a la desvalorización de la moneda?

Sr. Cooke. — A eso voy a llegar, porque es uno de los puntos que quiero tocar.

Sr. Santander. — Eso lo dice el presidente de la República.

Sr. Cooke. — El presidente de la República no sólo ha anunciado el peligro, sino que ha dado los medios y está creando el instrumento para combatirlo. Yo no digo que el gobierno haya sido infalible, pero voy a demostrar que las críticas de los señores diputados de la oposición, una vez que salen de las vaguedades de la dialéctica y van a la realidad, no reflejan hechos concretos de la vida nacional.

Sr. Santander. — Es una lástima que el señor diputado hable con tanta jactancia.

Sr. Cooke. — No es jactancia, señor diputado.

Sr. Rumbo. — El señor diputado está haciendo una magnífica exposición.

Sr. Santander. — No lo discuto, pero con una jactancia que es hiriente. Me parece que ninguno de los diputados que hemos intervenido en el debate merecemos eso.

Sr. Cooke. — Está muy equivocado el señor diputado; no hablo con jactancia, sino con convicción. Creo que los señores diputados no han dado un panorama exacto de la realidad nacional. Lógicamente, si creyese que los señores diputados tenían razón, estaría ahora representando y no exponiendo una orientación.

Sr. Santander. — El señor diputado ha dado la sensación de que nosotros hemos dicho sólo vaguedades.

Sr. Cooke. — No, señor diputado. Lo que digo es que cuando los planteos teóricos de los señores diputados han ido a la realidad de los hechos económicos, vemos que éstos los han desmentido, según la interpretación que doy a los mismos.

Sr. Santander. — Nos hemos referido a hechos concretos; no son vaguedades...

Sr. Cooke. — Señor diputado: si mi concepción fuese la suya, votaría con su sector y no con el mío.

Sr. Santander. — No se trata de eso, sino de una apreciación doctrinaria, que es una cosa distinta.

Sr. Cooke. — Está equivocado el señor diputado. En lo que respecta a la marcha de los hechos económicos, sobre la base de los datos, y de una adecuada interpretación de los actos financieros de nuestro gobierno, me parece que los panoramas que nos ofrecen los señores diputados van a quedar en el carácter de profecías, que no llevan mayores posibilidades de cumplirse. Les recuerdo la frase citada por Kemmerer: «La profecía es la manera más gratuita de equivocarse.»

Advierto al señor presidente que si cualquiera de los señores diputados de la oposición quiere rebatir mis opiniones, no tendré ningún inconveniente en admitir interrupciones; pero les ruego que no me interrumpan para calificar mi exposición, porque me parece que no puedo defenderme sin pecar de vanidoso.

Con respecto a la nacionalización del Banco Central en sí, el señor diputado Mántaras nos ha dicho que no se trataba de una medida aconsejable y necesaria, con cuya opinión ha coincidido el señor diputado Santander. El señor diputado Mántaras nos ha manifestado que no veía ni una razón que hiciera aconsejable la nacionalización del banco.

Voy a demostrar cómo existían motivos más que suficientes para ello. Me ha impresionado —por el conocimiento y amistad que guardo con el señor diputado Santander— que al comparar nuestra nacionalización con la de Inglaterra, dijera que ésta era el resultado de un proceso de madurez. Tengo mucho miedo a todas las expresiones referentes a la «falta de madurez» de la Nación Argentina para determinar ciertos procesos de carácter económico, porque ésa ha sido la base de la prédica de los imperialismos: sostener que la Nación no estaba calificada y no tenía todavía las condiciones necesarias de madurez para dirigir sus propios destinos. Su colega el señor diputado Peña Guzmán ha escrito un libro sosteniendo una teoría, que coincide con la mía...

Sr. Santander. — Si el señor diputado quiere ser ecuánime, debe concretar el pensamiento que yo expresé.

Yo he dicho que la nacionalización del banco en sí no es una cosa trascendental y revolucionaria, y he complementado, en una intervención del señor diputado, el juicio referente a ese proceso de madurez a que él se refería; pero en modo alguno, al decir esto, he sostenido el criterio que acaba de expresar el señor diputado, es decir, de que por esa razón vamos a permanecer inmutables con los viejos moldes y los viejos conceptos. No pueden desconocerse los acontecimientos que se producen en el proceso social de los pueblos. Yo creo en la evolución. He señalado sencillamente un episodio y dentro

del pensamiento expresado he tratado de desilusionar a los señores diputados del punto de vista en que se han colocado al dar trascendencia extraordinaria a una medida que, si se hubiera concretado a nacionalizar, no hubiera significado nada. Lo peligroso es que no se trata de una nacionalización simple, sino que se ha creado un instrumento de gobierno, que será un órgano directo del presidente de la Nación.

Sr. Cooke. — El señor diputado me ha dicho que no soy ecuánime. He sido ecuánime, porque yo no le he manifestado que él participara del concepto de la inmadurez, sino que me limité a señalar el peligro de facilitar argumentos a las fuerzas que están esperando cualquier recurso para propagar las teorías del predominio foráneo.

Sr. Santander. — No estoy en esa posición.

Sr. Cooke. — Por supuesto que no. Voy a suponer, para poder ir desarrollando la teoría de la necesidad de la nacionalización, que el anterior Banco Central haya sido bueno; voy a suponer que haya cumplido todas las funciones para las que fué creado. Aun así, no podría haber realizado la acción necesaria para detener el proceso inflatorio, ni emplear todos los esfuerzos necesarios en momentos de depresión. No lo digo yo; lo decía el mismo banco que, en sus memorias, solicitaba la ampliación de facultades, porque se encontraba impotente y desarmado ante la magnitud de los problemas que debía afrontar.

Sr. Peña Guzmán. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Cooke. — Si es breve, sí.

Sr. Peña Guzmán. — El Banco Central —y ya lo he dicho en otra oportunidad— decía casualmente que él estaba plenamente autorizado, dentro de las leyes y decretos, para emitir certificados de oro y divisas, que son papeles de absorción. En 1937, se le autorizó para emitir esos papeles de absorción en tal cantidad —y daba la cifra de 5.000 millones de pesos— que con ella hubiera podido evitar, si no totalmente, en gran parte, la inflación. Y daba las razones de por qué no lo hizo, que no era porque careciera de facultades, sino porque tenía en la bolsa de valores un competidor que era el gobierno nacional que, a causa del déficit del presupuesto, estaba copando el mercado, emitiendo títulos para cubrir ese déficit. Por ese único motivo, el Banco Central se quejaba, porque veía la imposibilidad de llevar una política antiinflatoria, ya que el competidor que tenía, que era el Estado, no le permitía emitir títulos y otros papeles de absorción.

Sr. Rumbo. — Pero el Banco Central estimuló la absorción con un crédito barato, y eso mismo lo dice en su memoria.

Sr. Cooke. — La emisión de papeles de absorción fué el único medio que usó el banco en la

proporción que pudo hacerlo; pero no pudo restringir el crédito, por no disponer del medio adecuado, y entonces se limitó a dar consejos, que los bancos podían seguir o no.

Los inconvenientes del sistema eran enormes; le faltaba, por ejemplo, elasticidad en el mecanismo de los redescuentos y en las operaciones necesarias a sus fines; le faltaban medios para realizar una nivelación que le permitiera mantener el equilibrio entre la cantidad de medios de pago y la de los bienes.

En la última memoria, la del año 1944, casualmente pedía que se modificaran las disposiciones sobre efectivo mínimo, como única forma de poner un freno al exceso de crédito ofrecido, en relación con los bienes a los cuales el mismo podría aplicarse. En la actualidad, simplemente con achicar el margen de redescuentos, el Banco Central puede evitar un aumento de circulante que incida sobre los precios de los bienes que haya disponibles.

Al Banco Central le faltaban poderes para hacer una política seria de fomento sobre la base de una paralela política crediticia.

Por supuesto, que el Banco Central anterior trató de conseguir los medios pidiéndolos al gobierno. En sus memorias, solicitó nuevas facultades, pero el gobierno, con buen criterio, porque ya estaba bastante comprometida en esta materia la soberanía, no se las concedió.

El señor diputado Mántaras decía, refiriéndose a la calificación de institución mixta y sui generis dada por la Corte Suprema, que eso no era motivo de alarma, porque era simplemente una calificación de la institución jurídica, y recordó que la historia bancaria nos enseña que la función de emisión nació al margen del Estado. Ello es así; pero la historia también nos enseña que son pocos los Estados que, en la oportunidad en que han podido, no se han atribuido y arrogado las funciones de emisión, como atributo esencial de la soberanía.

Creo, a pesar de lo que opina la Corte Suprema y de lo que opina el señor diputado Mántaras, que es negatoria del principio de nuestra soberanía la concesión a una entidad de esta naturaleza de la facultad de emitir billetes. Creo que la delegación de la soberanía tiene ciertos límites, que son tan estrechos que no pueden casi nunca llegar a concretarse en un instrumento jurídico. Pero, poniéndome en la hipótesis de que ésta fuese solamente una discrepancia doctrinaria porque, lógicamente, mi opinión puede no ser compartida por la mayoría de los señores diputados, pregunto si dicha ley no constituía un exceso en la delegación de facultades, al permitir que el Banco Central —una institución bancaria mixta sui generis— fuese el custodio del valor de nuestra moneda, el depositario de las reservas metálicas, el fisco-

lizador de los otros bancos y de su desenvolvimiento líquido; pregunto si no es excesiva la delegación de facultades al crear una institución de esta naturaleza y darle la función de orientar la política financiera, lo cual significa darle influencia preponderante en la dirección de la política económica, porque no se pueden desvincular ambos fenómenos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Agréguese que los señores diputados no han podido destruir la afirmación —no lo han intentado tampoco, porque eso surge de la simple lectura del artículo correspondiente— de la gran gravitación de la banca privada con respecto a los bancos del Estado, dado que tenían en la asamblea de bancos el 65 por ciento de los votos. No voy a insistir en el argumento de esta desproporción en los votos, comparándola con el mayor aporte de capital por parte del Estado, porque la defensa que ha hecho el ex ministro Pinedo —en un artículo publicado recientemente— es de estricta lógica dentro del sistema que estoy criticando. Pero al predominio de los bancos privados, se agrega la actuación de los intereses extranjeros por su gravitación en ellos.

Después de eso, ¿dónde está la soberanía del Estado en materia tan fundamental y en asunto tan vinculado a todo el proceso de la evolución del país? (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

En el año 1826, cuando se discutió el Banco Nacional, ya Agüero señalaba la necesidad de que no interviniese ningún extranjero en esta materia. Y ya había pasado en esa época la exacerbación de carácter xenófobo que pudiera haber existido. Vendría bien ver, a este respecto, el tomo II, página 469, de las Asambleas Constituyentes Argentinas.

A todos los autores que se han citado como partidarios de que sea función separada del Estado la del Banco Central, podrían oponerse, por lo menos, otros tantos partidarios de nuestra teoría. Así que, a ese respecto, no habría debate, porque sería un simple intercambio de citas sin resultado positivo.

Pero he afirmado: primero, que el antiguo Banco Central no podía hacer frente a la situación económica; segundo, que sus atribuciones excedían los límites que puede permitir un Estado que tiene respeto por su propia soberanía.

Sr. Peña Guzmán. — Si me permite el señor diputado...

Como las afirmaciones que hace el señor diputado reiteran su manifestación anterior, quiero leerle dos simples párrafos.

Sr. Cooke. — Si son muy breves, sí.

Sr. Peña Guzmán. — Muy breves.

En la encuesta continental sobre el control de la inflación y su incidencia en el costo de la vida, realizada por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, al hacer el estudio de toda la situación financiera en los países americanos, dice lo siguiente: «Especialmente

la Argentina, cuyo Banco Central dispone de poderosísimos recursos para frenar la inflación, recursos que no ha podido utilizar sino en mínima parte.» El propio Banco Central, en su memoria de 1944, dice: «El Banco Central cuenta con facultades y recursos abundantes para realizar la cancelación de fondos disponibles, una vez establecidas las condiciones que permitan llevarla a cabo sin otras limitaciones que la capacidad de absorción de sus papeles por parte del público.» Después de las razones de por qué no lo puede hacer. «Mientras el gobierno, a fin de cubrir sus necesidades, debe colocar títulos y tomar en esta forma la totalidad de los fondos que el público está dispuesto a invertir en papeles de renta, no tendría objeto que el Banco Central realizara una política de absorción de fondos.» Quiere decir, que no hago afirmaciones teóricas, sino concretas, basadas en documentos oficiales.

Sr. Cooke. — En primer lugar, el señor diputado ha dicho «el propio Banco Central», porque parece olvidar el señor diputado que no siempre los intereses de la Nación han sido interpretados de igual manera por el Banco Central y por el gobierno nacional. En segundo lugar, el banco se desmiente a sí mismo al solicitar nuevas facultades para poder poner fin a la inflación. Me gustaría discutir este punto, el que deseaba desarrollar extensamente, pero veo que no podré hacerlo.

Ahora bien; vamos a ver previamente cuáles son las razones que informan la necesidad de crear el sistema bancario actual.

No insistiré sobre el aumento de la producción, que es indispensable para la marcha económica del país. El señor presidente de la República lo ha expresado en este recinto hace pocos días.

La política crediticia no puede quedar, frente a la actual organización económica y financiera, librada al beneplácito de quienes están investidos de la facultad de conceder los créditos. Es necesario que exista una doble fiscalización y que el Estado esté en condiciones de realizar una verdadera política, es decir, dar orientaciones, señalar derroteros, evitando que el capital disponible vaya a incidir en el aumento de la inflación, en vez de crear riqueza.

La regulación cuantitativa es fundamental, porque en determinado momento el Estado puede restringir el crédito, a fin de evitar el aumento de circulante; la disminución cualitativa, porque no pueden tener el mismo trato quienes piden crédito con diferentes fines. Hay créditos que por el desarrollo y la trama de los acontecimientos económicos van a incidir en desmedro de nuestra economía, y hay otros que merecen ser estimulados. Eso es lo que se llama la distribución sobre la base de una discriminación cualitativa, principio que ha aceptado

Francia en su moderna reforma y que, por otra parte, no significa, como dicen algunos, que el Poder Ejecutivo, desde este momento, por intermedio del Banco Central, cortará el crédito a aquellos que no participan de sus ideas políticas. Este argumento ha sido repetido hasta la saciedad, y me alegro de que no haya encontrado eco en este recinto, y haya quedado, para los que siguen repitiendo mecánicamente y como único argumento, «Perón es nazi».

Únicamente ahora se ha podido establecer una sana relación cuantitativa entre el volumen de los medios de pago y los servicios ofrecidos. El aumento de los fondos en circulación ha obedecido a causas naturales, sin recibir ninguna clase de incremento artificial sobre la base de desaciertos en política crediticia.

La única manera de realizar política anticíclica es por medio de la nacionalización de los depósitos, que permite al Estado revertir sobre el mercado los fondos en momentos de depresión y restringir los créditos cuando el proceso inflacionista se acentúa.

Continuamente, todos los que se han ocupado de cuestiones económicas han insistido en la necesidad de establecer índices variables del efectivo mínimo legal que los bancos debían depositar en el Banco Central. La escala, que era muy rígida, fué fijada en momentos de enrarecimiento económico y no podía desempeñar ninguna función benéfica cuando los medios de pago eran abundantes.

Esa es para mí la principal función de la nacionalización de los depósitos; pero creo que también la garantía al pequeño ahorrista tiene importancia, valor y significado.

Ya sé que los señores diputados pueden hacer el argumento de que el depositante elige los bancos en los que tiene confianza; pero los bancos no siempre han estado en condiciones de responder a esa confianza, y prueba de ello es la malhadada aventura del Instituto Movilizador.

La estadística que hizo esta mañana el señor diputado Peña Guzmán, referente a la proporción de depósitos con garantía, es sólo exacta en parte, porque las proporciones deben ser variadas. Al respecto, le recuerdo que no todos los bancos mixtos tenían garantía del Estado para sus depositantes. Fíjese el señor diputado que el Banco de la Provincia de Buenos Aires no la tenía.

Por otra parte, en una interrupción que hice al señor diputado, dije que el artículo correspondiente de la ley anterior referente a los depósitos hasta 5.000 pesos, constituye, no una garantía, sino un privilegio, que podría llegar o no hacerse efectivo, según el haber y la cantidad de créditos con privilegio superior.

La regulación bursátil es una medida indispensable para evitar las fluctuaciones bruscas

de valores, que son las que a veces ocasionan males terribles a la economía en tiempos de crisis, de guerra o por movimientos agitados de fondos.

El señor diputado Santander nos dijo que el gobierno había forzado la cotización de algunos títulos. Lógicamente que es un argumento algo difícil de rebatir sobre la base de cifras, porque habría que empezar por presumir intenciones; pero tengo muchos motivos para suponer que esta política ha dado sus frutos. Por ejemplo, el éxito de la conversión de la deuda, en la cual los títulos fueron convertidos en proporción extraordinaria, porque sobre casi 4.000.000.000 de pesos, sólo 78.000.000 no fueron convertidos y sus tenedores prefirieron el rescate.

Sr. Santander. — ¿Me permite el señor diputado?

Sr. Cooke. — Sí, señor diputado.

Sr. Santander. — Me permito recordarle que antes de la conversión el señor ministro de Hacienda anunció que no se iba a realizar esa operación. Los títulos del 3 ½ por ciento los tenía el Banco Central y comenzó a venderlos. Los colocó a 80 y 86 pesos. ¿Cuánto es lo que le costó al Estado una vez realizada esa conversión de los títulos del 4 y 4 ½ por ciento? Aquellos títulos del 3 ½ por ciento —hoy rescatados—, ¿cuánto han costado al país? ¿Sabe el señor diputado lo que eso ha significado para las finanzas del Estado?

Sr. Cooke. — Yo no quiero reabrir este debate sobre esto, que es un aspecto incidental, pero no participo de la opinión del señor diputado.

¿Sabe el señor diputado por cuántos centavos están separados los títulos del 3 ½ por ciento del nivel de la par? Por treinta o cuarenta centavos.

Sr. Santander. — Por la acción del Banco Central.

Sr. Cooke. — Por supuesto; pero no va a demostrar el señor diputado que ésa es una acción perjudicial.

Sr. Santander. — No la critico. Es una función que debe realizar el Banco Central como regulador de la moneda.

Sr. Cooke. — Si hubiese sabido que el señor diputado iba a hablar a favor de mi tesis, no le hubiese interrumpido.

Sr. Santander. — No, señor diputado. No me interprete mal. Quiero decir que una cosa es la política natural monetaria del Banco Central, considerando y contemplando la situación de la economía a través del mercado bursátil, y otra es la compulsión del Banco Central para fines determinados, valorizando unos papeles en forma artificial.

Sr. Cooke. — Eso lo dejo librado al debate ya realizado en esta Cámara.

Sr. Santander. — Es la política monetaria compulsiva que yo combato.

Sr. Cooke. — La política del dinero barato, que tanto se ha discutido, es una política de beneficio.

La política del dinero barato, cuando se hace sobre la base de una disminución automática de la tasa, puede dar lugar a un exceso de dinero disponible y a una competencia en la colocación del mismo; pero por el medio de la nacionalización de los depósitos es evidente que la política del dinero barato podrá haber tenido éxito, porque podrá de tal manera ser discriminada: que el dinero barato no se convierta en un factor de inflación, sino de incremento de la riqueza nacional.

Voy a tener que dejar de lado todos los demás argumentos sobre la nacionalización de los depósitos, porque quiero hablar de algunas medidas concretas de la política del gobierno, que ha empezado a dar sus frutos.

Voy a referirme ahora a la repatriación de la deuda externa. Aquí se han hecho, con respecto a la repatriación de la deuda externa, las afirmaciones más dispares. Se la ha comparado con la Reconquista y, por otro lado, se ha afirmado que es una simple operación financiera debida al exceso de divisas. Creo que ambos sectores hemos estado algo desmedidos en la crítica y en el elogio.

El señor diputado Santander nos recordaba, el día de la interpelación al señor ministro de Hacienda, que la idea no es original del gobierno de la revolución. La verdad es que el gobierno de la revolución no hace cuestión de celos en esta materia, no tiene vanidad paternal y le basta con que las circunstancias le hayan permitido llevar a cabo lo que ha sido antes aspiración de otros ciudadanos.

Sr. Santander. — Completamente el pensamiento y ha de reconocer que el señor ministro de Hacienda coincidió técnicamente en la apreciación que yo hacía con respecto al traslado de la deuda externa al país.

Sr. Cooke. — Lo que dijo el señor ministro de Hacienda es que no se había hecho con superávit, porque si se hubiese hecho con superávit hubiesen sido mucho mayores sus beneficios. Que la repatriación de la deuda ha producido beneficios, es evidente.

Sr. Santander. — Pero el señor ministro le quitó la trascendencia que el señor diputado le quiere dar a esa operación.

Sr. Cooke. — El señor ministro le habrá quitado trascendencia...

Sr. Santander. — Yo dije que era un simple cambio de manos.

Sr. Cooke. — Pero es una equivocación del señor diputado creer que se ha producido un simple cambio de manos.

Sr. Santander. — Lo ha reconocido el señor ministro de Hacienda.

Sr. Cooke. — En el supuesto de que el señor ministro de Hacienda hubiese reconocido expresamente lo que está diciendo el señor dipu-

tado —lo que no es así—, la opinión del señor ministro es la opinión del señor ministro, y la opinión del diputado que habla es la opinión del diputado que habla.

Voy a decir al señor diputado cuál es mi opinión sobre la repatriación de la deuda. Tiene las siguientes ventajas económicas: Primera, los servicios no serán pagados más al extranjero... y por favor, señor diputado, no me vaya a llevar a una discusión sobre quién tiene los títulos y a quién se le van a pagar los intereses, porque no hay dato alguno, ni poder humano capaz de tener la cifra exacta, que he buscado empeñosamente. Pero, teóricamente, debemos presuponer que la gran parte de ella —y el señor ministro de Hacienda así lo ha ratificado— se encuentra en el país. Segunda, se ha disminuído la tasa de interés, haciéndose una rebaja en los servicios, que alcanza anualmente a una suma apreciable. Tercera, se ha aumentado el plazo. Cuarta, es una sana medida de política antiinflacionista, porque al emitirse el empréstito para rescatar la deuda externa, se han absorbido del mercado una serie de fondos que estaban gravitando en la inflación.

Ya verá el señor diputado cómo en esta materia he sido bastante ecuaníme. No fué una nueva reconquista, pero quiero creer que muchos señores diputados participarán de mi criterio de que no fué una simple y fría operación hecha sobre la base de un cambio de manos.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Ricardo C. Guardo.

A eso debe sumarse que independiza el pago del servicio de las fluctuaciones derivadas de la relación que existe entre la libra y el peso; porque ahora se va a pagar en pesos moneda nacional y no habrá que estar pendiente de las cotizaciones monetarias internacionales.

Además, ha de comprender el señor diputado que nosotros tengamos motivos, que reconozco serán sentimentales, pero no por ello menos importantes. La deuda externa ha sido fomentada por los países de penetración imperialista en nuestro continente, porque muchos gobiernos endeudados han sido arcilla en manos de los fuertes consorcios internacionales. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Los déficit de presupuesto han correspondido, desde hace muchos años, al monto de la deuda pública, y cuando los gobiernos han sido complacientes se ha conseguido aumentar el monto de la deuda a veces con el pretexto de dar a los empréstitos un destino que nunca se ha llegado a cumplir. Hace ciento veinte años que la deuda externa era uno de los capítulos de la opresión de nuestra economía nacional. Creo que tiene razón el señor diputado Santander: si mañana nosotros, por contingencias de la vida económi-

ca, concertásemos un nuevo empréstito con el extranjero, nuestra dignidad nacional y nuestra soberanía no se sentirían resentidas en lo más mínimo, porque se trataría de operaciones normales que no van en mengua de la dignidad de los países. Pero cuando, por medio de la deuda al exterior, se ha llegado a presionar en la política económica y hasta en la política general de los países, cuando la insolencia del imperialismo llegó hasta el grado de pretender cobrarse directamente de los fondos de la aduana, cuando pretendió inmiscuirse de tal manera en funciones esenciales de nuestro Estado, ha de comprender la Cámara que nosotros pongamos en esto algo de valor sentimental. No por odio al extranjero, ni por exacerbación nacionalista, sino por la satisfacción de haber sacudido un yugo que nos molestaba en nuestras finanzas y nos hería en nuestra dignidad. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Ese es el valor, el significado y la trascendencia del rescate de la deuda externa, por encima de las frías cifras de los balances.

Cuando el señor ministro de Hacienda contestó su interpelación, se sostuvo que el rescate de las cédulas hipotecarias había sido un factor de inflación y la conversión de la deuda interna también, por haber revertido sobre el mercado dinero que había abandonado la tranquilidad de la tasa del 4 por ciento.

Creo que en modo alguno esas medidas han podido tener ningún efecto agravatorio de la inflación. La conversión tuvo efectos beneficiosos al disminuir los servicios. De la cifra de 222 se bajó a 163, lo cual daba una disminución de más o menos 57.000.000. Los capitales que rehusasen esta colocación al 3 por ciento podían, por su parte, desviarse hacia nuevas fuentes de producción, creando trabajo, y convertirse de esta manera, en factor antiinflacionista.

Aparte eso, el hecho es que, en un 98 por ciento, la deuda fué convertida y solamente en 2 por ciento rescatada. Fué un simple cambio de bonos por bonos, con esta ventaja: que en el país la tasa de la deuda pública ha bajado a 3 por ciento y estamos ingresando ya en la categoría de los países de finanzas sanas que pagan muy corto interés. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

El señor diputado Zara dijo: «Es tan exacto lo que digo que en el último boletín estadístico del Banco Central, que he recibido ayer, en el índice de ventas de los comercios minoristas de Buenos Aires, entre los meses de junio y julio —es decir, 30 días—, los precios base van de 223,4 a 236,2.» De ahí saca en conclusión que el rescate de las cédulas hipotecarias y la conversión han motivado lanzamiento de circulante sobre el mercado, que ha encarecido los precios.

El argumento no es sólido, porque el señor diputado ha incurrido en un error que es muy fácil que se produzca entre los que tenemos que andar en esta maraña de los índices y de los números. Lo que él toma por «precio de los artículos de comercio minorista», es, en realidad, el «volumen de las ventas»; la cifra que se da acá no es un aumento de precio, sino simplemente un aumento de volumen, y entre los meses de junio y julio el índice de las ventas de los grandes comercios minoristas sube porque se producen las liquidaciones de invierno. Tome el señor diputado la estadística del año anterior al producirse la liquidación de julio para los artículos de tienda y similares: el incremento del volumen de los negocios minoristas aumenta, para después retomar su nivel en el mes de agosto. Es decir, que la conversión de la deuda pública no fué factor de inflación, sino todo lo contrario.

Sr. Santander. — ¿Y con respecto a los productos agropecuarios?

Sr. Cooke. — A eso quería ir. Interesa eso.

Sr. Santander. — Vale la pena hacer la comparación.

Sr. Cooke. — Lo que fué aquí dado como causal de inflación no lo es en realidad, porque el aumento que se atribuye a «precios» es simplemente un aumento de «volumen». Pero ha habido realmente un aumento de moneda correspondiente a ese período, y de ahí proviene el error del señor diputado Zara. El aumento de moneda es de 97,1 millones de pesos en ese período. Pero es más lógico, me parece, buscar las causas en el aumento de oro y divisas que corresponde exactamente a 97,7 y correlacionarlo con el saldo del comercio exterior, que para ese mes arroja un aumento de 236. De modo que ni la conversión de la deuda pública ni el rescate de cédulas hipotecarias, fueron factores de inflación. Ese es un argumento que ha sido esgrimido muchas veces, no sólo en esta Cámara, sino en toda la literatura opositora.

La Argentina ha demostrado que los intereses que paga por su deuda pública son pequeños, como son pequeños los que pagan Suiza y Suecia, países de sólida economía, y contrariamente a lo que sucede en países de economía colonial, debilitada, o en bancarrota. Pero no voy a hacer un argumento político de eso. Simplemente diré que los inversores argentinos tienen confianza en la Nación, en su fuerza y en el rigor de su economía.

—Suena el timbre que indica la expiración del término reglamentario.

Estoy hablando en nombre del bloque a que pertenezco.

Los señores diputados han hecho constantemente el argumento de la inflación y han querido atribuir la misma a una mala política

financiera del Estado. Para que sea encarada la inflación hay que tener como base dos premisas: primero, que el fenómeno tiene características mundiales y que es un proceso ineludible que sólo puede atemperarse, pero no eliminarse completamente; segundo, que el Estado debe intervenir para tratar de amenguar sus efectos.

Ahora bien: basta leer todos los artículos que se han publicado en contra de la política financiera del gobierno, para encontrarnos con una nota monocrorde: la inflación se debe a la excesiva burocracia, al aumento de los gastos públicos y al aumento de los sueldos y salarios. Se ha repetido tanto este argumento, que hasta quienes lo han esgrimido como excusa o pretexto, han terminado por creerlo.

Para mí, es un argumento expuesto en un idioma muerto, en un lenguaje arcaico.

Sr. Santander. — Sin embargo, el ex ministro Ameghino sostenía precisamente eso...

Sr. Cooke. — Es una opinión personal.

Sr. Santander. — ...y el señor Ameghino es uno de los actuales asesores del Banco Central de la República.

Sr. Cooke. — Será un asesor, pero no es quien dirige la política. Si vamos a buscar opiniones aisladas, yo también puedo encontrar otras en el propio sector del señor diputado.

Sr. Santander. — Esa opinión consta en un documento oficial, cuando el actual presidente de la República era vicepresidente.

Sr. Cooke. — Ya verá el señor diputado en qué baso mi afirmación.

Este es el momento, señor presidente, de hacer una verdadera política conveniente para el país. No hay que pensar solo en paliativos, sino en desarrollar una política que vaya previendo numerosos procesos que ineludiblemente se tendrán que producir. En este momento los imperialismos más poderosos están buscando medidas, aunque sólo sean de carácter circunstancial, y es en estos momentos cuando quiere hacérsenos creer que la inflación en nuestro país se debe a que no hacemos caso a los consejos de la oposición.

Nuestra inflación tiene causas perfectamente determinadas: primero, la ocupación plena de nuestra economía en un período de franca expansión, fenómeno que, como ya dijo el señor ministro de Hacienda, se produjo en 1942-43; segundo, el desequilibrio extraordinario de la balanza de pagos en nuestro favor, que ha dado como consecuencia una cantidad de medios de pagos muy superior a la de los bienes; tercero, la contracción de las importaciones que ha impedido que tengamos más bienes donde colocar el medio circulante.

Otro factor que debemos considerar: al impedir que lleguen maquinarias, se ha impedido

que nuestro proceso inflacionista tuviera una salida por esa vía.

Las libras bloqueadas en el extranjero han sido la causa principal y fundamental, porque sobre la base de ellas se ha emitido, produciéndose de tal manera un doble efecto: primero, el dinero aumentaba en la circulación; segundo, el dinero, al llegar a manos de los vendedores de divisas, iba nuevamente a los bancos y, salvo la parte que quedaba como efectivo mínimo, el resto volvía a la circulación, aumentándola.

Tercera fase del problema: como el Estado tenía que absorber esos fondos, emitía empréstitos y tenía que estar satisfaciendo intereses y pagando servicios, con lo que se causaba un nuevo perjuicio.

Frente a todo eso, no se nos puede venir a decir que al aumento de burocracia o de los gastos públicos obedece el proceso inflatorio; porque el señor ministro de Hacienda demostró, a mi juicio con éxito, que una nivelación brusca de presupuesto traería en estos momentos aparejada una serie de consecuencias funestas para nuestra economía, y citó la publicación de la Liga de las Naciones «Estabilidad económica en el mundo de la posguerra» en apoyo de su opinión.

Veamos las cifras: en el año 1941, el aumento de las divisas —tomadas las de compensación y de libre disposición— era de 472; ese aumento llegó a ser en 1945, de 1.175, es decir, que el aumento era del 250 por ciento. En forma correlativa va aumentando nuestra cuenta de oro y divisas, nuestros billetes y depósitos en cuentas corrientes, y, lógicamente, el nivel de los precios agropecuarios y no agropecuarios.

Ahí está el secreto de la inflación. ¿Cómo puede atribuirse a los gastos públicos del Estado, si ellos representan una parte mínima del problema, casi insignificante ante la magnitud de éste?

Pero seguiré suministrando datos de los porcentajes. El aumento total de medios de pago en el año 1941 fué de 1.051 millones de pesos, para seguir a 978, 1.308, 1.150 en los años siguientes, hasta llegar en el año pasado a 1.330. De estas cifras, corresponden a factores internos 458, 465, 1.321 y 1.067 millones, respectivamente. Los factores externos han incidido en la siguiente proporción en el aumento de los medios de pago: 43 por ciento, 47 por ciento, 101 por ciento, 71,6 por ciento, 80,2 por ciento; es decir, que los factores externos aumentaban los medios de pago en 80,2 por ciento, el año próximo pasado.

¿Qué límite queda para esos derroches del Poder Ejecutivo? El aumento de los gastos fiscales ha incidido en forma mínima. En el año 1941 fué de 18,2 por ciento, que fué bajando a 16,7 por ciento, al 4,1 por ciento, al 6,2 por ciento, para llegar a este momento al 15,7 por ciento,

sin tener en cuenta, por supuesto, que al mismo tiempo hay una proporción de medios de pago absorbidos por las razones que he explicado.

No pudiendo nivelar la balanza de pago, ¿qué pudo hacer el Poder Ejecutivo? El banco anterior emitió bonos de absorción, letras de tesorería y después certificados de custodia de divisas y oro. Era un sistema oneroso, porque debía satisfacer los intereses de los mismos. Todos esos bonos de absorción han sido retirados porque, como ahora se pueden inmovilizar los depósitos bancarios, no hay necesidad de estar pagando inútilmente un interés sobre los papeles de absorción y ya no existen ni bonos de absorción ni certificados de oro y divisas.

Sr. Santander. — Si me permite, señor diputado...

¿El señor diputado sostiene que el Banco Central moviliza a su gusto los recursos del ahorro popular? Eso sería muy grave.

Sr. Cooke. — No, señor diputado; yo no estoy diciendo que moviliza los ahorros, sino que los inmoviliza al no permitir a los bancos que puedan emplearlos en crédito sino en los límites que cree conveniente, con lo cual impide que el exceso de crédito lance demasiado dinero al mercado. El proceso es perfectamente claro.

Sr. Santander. — Bien señor diputado; no había percibido con claridad.

Sr. Cooke. — Al llegar a la nacionalización se estableció recién la posibilidad de cumplir la función que ya estaba concedida al banco anterior, pero sin los medios de lograrla: la función de «regular la cantidad del crédito y de los medios de pago adaptándolos al volumen real de los negocios». Esa es parte de la política anticíclica que desarrolla el Poder Ejecutivo, como la repatriación de la deuda externa, la discriminación cualitativa del empleo de los créditos —una sana política crediticia— y otras medidas expuestas por el señor presidente de la República, lo que permite ir afrontando estos momentos de gran inflación mundial sin que el país sufra sus efectos sino en una parte muy pequeña en relación con otros que eran igualmente neutrales.

Yo no he dicho que el gobierno haya sido infalible como tampoco digo que pueda destruir la inflación, porque la inflación obedece a indestructibles relaciones de causalidad con la economía internacional. Pero es evidente que la Nación produce y vende, y entonces el medio circulante aumenta; y eso no hay como contrarrestarlo hasta tanto no se pueda nivelar nuestra balanza o fomentar nuestra producción hasta el grado necesario —en este momento no tenemos la maquinaria—, o tirar los productos de nuestra tierra al mar.

Sr. Peña Guzmán. — ¿Me permite una breve interrupción?

Sr. Cooke. — Sí, señor diputado.

Sr. Peña Guzmán. — Si se toma el boletín estadístico del Banco Central correspondiente al mes de octubre, tenemos que cuando se nacionalizó el Banco Central, en el mes de marzo, había moneda en público por un valor de 2.578.000.000 y que hoy hay aproximadamente 3.000.000.000 de pesos. De cumplirse lo que el señor diputado dice respecto a la política del Banco Central nacionalizado, debería haber menos dinero en manos del público a los efectos de evitar la presión sobre los precios. En cambio, según el boletín estadístico del Banco Central, existen 500.000.000 de pesos más en circulación, lo cual contradice totalmente esa afirmación.

Sr. Cooke. — Creo que debemos basarnos en estadísticas a partir de la nacionalización del Banco Central.

Sr. Santander. — Ayer también yo he dado cifras correspondientes a la época anterior y a la época posterior a la nacionalización. Esas cifras coinciden con las dadas por el señor diputado.

Sr. Cooke. — Yo voy a hablar de marzo a esta fecha, porque ese es el único objeto que tiene en estos momentos defender la nacionalización.

En marzo de 1946 la circulación monetaria era de 2.978.000.000 y dos meses después, es decir en mayo, era de 3.414.500.000, lo cual hizo decir al señor diputado Zara que era porque el Banco Central no cumplía las funciones para las que fuera creado.

Se olvidan los señores diputados, al hablar del aumento de circulante, de que en el mismo balance hay una llamada para señalar que los 300.000.000 de pesos de moneda subsidiaria, billetes hasta de cinco pesos que antes dependían del gobierno, y que ahora han pasado al Banco Central, han sido respaldados con oro. Cuando se habla, pues, del aumento de circulante, como se está hablando de moneda respaldada, se incluyen 300.000.000 de pesos que no han sido lanzados al mercado, porque ya estaban en él. Se trata de una simple operación matemática.

Sr. Santander. — No, señor diputado. Antes de la nacionalización, y por virtud de un simple decreto del Poder Ejecutivo, se hizo un avance a la ley 4.155 sobre la moneda subsidiaria de cinco pesos. Aquella determina que no debe sobrepasar de veinte pesos por habitante la circulación, y con la última emisión de esa moneda, efectuada el 3 de junio de 1945, llegó a veinticinco pesos por habitante, lo que quiere decir que ya en aquella época circulaban 75.000.000 de pesos sin respaldo de la ley.

Sr. Cooke. — Supongamos que fuese así. De cualquier manera, en los balances del banco consta claramente que el aumento real ha sido

de 322.000.000 de pesos para un período de seis meses.

Sr. Santander. — Es posterior.

Sr. Cooke. — Estoy tomando el período de seis meses, hasta septiembre. Como evidentemente los fenómenos económicos tienen interdependencia, hay que ver a cuanto asciende el aumento de nuestra existencia de oro y divisas para igual período; el aumento ha sido equivalente a 1.311.000.000, es decir, un promedio mensual de 218.500.000 pesos, o sea que cada treinta días aumenta en alrededor de 220.000.000 de pesos la cuenta de oro y divisas.

Sr. Peña Guzmán. — No, señor diputado. En la disertación que hice toqué ese punto y lo expliqué. Dije que si tomamos el Boletín Estadístico del Banco Central vemos que en el mes de abril figura en la columna oro y divisas la suma de 3.552.000.000, y que en dos meses sube 1.100.000.000 de pesos, cosa inaudita e imposible...

Sr. Cooke. — Eso se debía al rescate que se había hecho de los certificados de custodia.

Sr. Peña Guzmán. — ...porque es absurdo creer que pueda la Argentina exportar tal cantidad. Si se observa la columna de depósitos en la parte que se refiere a inversiones a corto plazo, se ve que llega a 1.195.000.000 hasta la misma fecha; apenas 53.

Lo que ha pasado es simplemente lo siguiente: antes no se consideraba como respaldo del medio de pago a los cerca de 1.100.000.000 de pesos, que eran certificados, oro y divisas, que se hacían en cuenta aparte. Esos certificados ahora circulan con respaldo. El banco considera ahora como oro y divisas lo mismo que antes hacía el banco con respecto a las divisas bloqueadas en Inglaterra.

Sr. Cooke. — Al rescatarse los certificados de custodia de oro y divisas, el banco, lógicamente, tiene que incluir el oro y las divisas en esa columna, porque en alguna parte tiene que ponerlos.

Sr. Santander. — No es cuestión de poner...

Sr. Cooke. — El señor diputado se está refiriendo a una cosa y yo a otra.

Sr. Santander. — Estamos hablando distinto lenguaje, pero del mismo asunto.

Sr. Cooke. — Creo que no.

Sr. Santander. — Está interpretando mal. La afirmación que acaba de hacer es muy ligera e irreflexiva.

Sr. Cooke. — Yo he hecho las cuentas.

Sr. Santander. — Revela poca responsabilidad, y excúseme el señor diputado, porque se lo digo con todo respeto.

Sr. Cooke. — El señor diputado no me puede decir con respeto que no tengo responsabilidad.

Sr. Santander. — Le he presentado mis excusas por anticipado. No le quise decir responsabilidad en el sentido de que no sabe lo que dice,

sino que me refiero a la ligereza del juicio formulado al hacer esa apreciación.

Sr. Cooke. — Yo hago las cuentas sobre la base marzo-septiembre, y llego a la conclusión de que —descontados todos los factores que pueden provenir de otras causas— el aumento es de 1.311.000.000 de pesos.

Sr. Santander. — No estamos en desacuerdo sino sobre el concepto.

Sr. Cooke. — Si estamos de acuerdo en las cifras tenemos que estar de acuerdo en el carácter de la emisión.

Sr. Santander. — No, señor diputado.

Sr. Zara. — Estamos de acuerdo con algunas cifras, pero no con los justificativos sustentados.

Sr. Cooke. — Restando de los 6.000.000.000 de septiembre los 4.696.000.000 de marzo, tenemos una diferencia de 1.311.000.000, aproximadamente.

Sr. Peña Guzmán. — Casualmente, lo que quería explicar es una de las críticas que yo formulé a lo que está haciendo el Banco Central nacionalizado. De acuerdo con la carta orgánica —tanto la anterior como la actual— no se deben considerar las libras bloqueadas, porque no caen dentro de los requisitos exigidos por ambas cartas orgánicas para ser consideradas como respaldo del circulante, sino que es un simple crédito abierto en Inglaterra. Es una simple operación de contabilidad. En cambio, el Banco Central las ha considerado directamente como respaldo, y es por eso que se abultó extraordinariamente en 1.000.000.000 de pesos la existencia de oro y divisas del Banco Central, que no obedece a que en esa época hubo un saldo favorable en el balance de pagos. Los grandes saldos anuales de los últimos años ascendían a 1.000.000.000 de pesos, que ahora van decreciendo porque aumentan las importaciones. ¿Cómo puede creerse que en seis meses se llegue a la cifra de 1.311.000.000 de pesos?

Sr. Cooke. — Ahí viene la discrepancia y de ahí las expresiones del señor diputado Santander. Lo que sostiene el señor diputado es que el Banco Central ha violado una cláusula relativa al respaldo del circulante y argumenta acerca del valor que puede tener la emisión sobre oro y divisas. Eso es una cosa, pero yo voy a las cifras globales y me desentiendo de los argumentos de si el banco ha cumplido o no con aquella disposición, porque demostrar al señor diputado lo contrario, me llevaría media hora de exposición, dado lo difícil que es este punto que ha promovido mi preocupación. Yo he hecho la cuenta sobre la base del disponible en oro y divisas. En cuanto a si esa disponibilidad está bien o mal hallada, es materia completamente ajena a lo que expongo.

Sr. Santander. — Lo establecen en la ley y los decretos.

Sr. Cooke. — Entonces, en todo caso sería una violación de la ley que debería ser tratada aparte.

Sr. Santander. — Es un juego de habilidad.

Sr. Cooke. — No. Lo que estoy demostrando son cifras con referencia al Banco Central. Si el señor diputado cree que ha habido una violación de la ley por parte de las autoridades, será el caso de interpelar al señor ministro de Hacienda, pero no venir con argumentos tangenciales para desviarme de mi exposición, llevándome a un tema cuya discusión nos insu-
miría mucho tiempo.

Comprendo el argumento del señor diputado y creo que es serio; pero también le digo que no tiene nada que hacer ni ataca el fondo de mi argumentación, que tiende a demostrar por medio de las cifras de este balance serio, que el aumento de circulante no ha correspondido exactamente al aumento de oro y divisas, al aumentó de la custodia, sino que, por el contrario, la emisión se hizo en la medida indispensable para las necesidades generales, debidas a la situación favorable de nuestro balance de pagos.

Estoy hablando de un tema y los señores diputados me llevan a otra cuestión, que no refuto, para no distraerme; pero no se destruye mi argumento en cuanto se refiere al volumen circulatorio en el período comprendido entre la nacionalización y el 30 de septiembre.

Sr. Peña Guzmán. — Si me permite, le explicaré. El señor diputado decía en su argumentación, haciendo caso omiso del aspecto de los artículos de las cartas orgánicas, que esos 1.300.000.000 de pesos en seis meses significaban un promedio mayor de 200.000.000 de pesos por mes que habían entrado al país.

Sr. Cooke. — No, señor diputado; que habían entrado al rubro del balance. ¿Cómo puede creer el señor diputado que yo venga a afirmar que las divisas hagan entrar oro al país!

Sr. Peña Guzmán. — Eso es lo que dijo el señor diputado.

Sr. Cooke. — Comprendo la magnífica réplica que me podría hacer el señor diputado si yo hubiera dicho semejante cosa.

El señor diputado Peña Guzmán en su libro sobre *La Autarquía en la Argentina*, hace la crítica de los índices estadísticos, crítica de la que yo participo; pero ha prestado su crédito a los estudios económicos de la Sociedad de las Naciones y entonces yo he procurado obtener el último boletín estadístico correspondiente a julio de este año. Voy a citar algunas cifras por la seriedad que para el señor diputado Peña Guzmán reviste esta publicación. Se refiere al volumen de la circulación monetaria tomando como base en 1939 el número 100. En ese balance nosotros figuramos en tercer término, des-

pués de Suiza y de Suecia. Hay que tener en cuenta que ambos son países neutrales y de sólida economía y que Suecia ha sido el país más previsora en materia de inflación. Y tomando como base 100 en 1939, la cifra actual que nos corresponde es de 237 contra una cifra similar de Irlanda, 239 de Nueva Zelandia, para ir marcando escalonadamente 289, 304, 312, 322 hasta llegar a 529 que corresponde a la India, país con el cual lógicamente no puede establecerse comparación. Es decir, que el volumen de la circulación monetaria en nuestro país ha aumentado; pero le corresponde el tercer lugar por la proporción del menor aumento. Y esto es importante, porque ya he dicho que hay factores inevitables de inflación como es el saldo favorable de nuestro balance de pagos, que son imposibles de contrarrestar.

Sr. Presidente (Guardo). — Ha pasado con exceso el término reglamentario, señor diputado.

Sr. Cooke. — Dos palabras más y termino.

El señor diputado Mosset Iturraspe nos ha dicho que hay una pérdida de confianza del público en el manejo financiero del gobierno y que eso motivó que en el año 1944 los capitales, en vez de invertirse en títulos de la deuda, se evadieron buscando otras inversiones que ofrecían más seguridad y en títulos a corto plazo. He revisado la memoria anual del Banco Central y me encuentro con lo siguiente: que el total suscrito fué de 365.500.000 pesos, que las subscripciones adjudicadas al público fueron de 236.587.900 pesos y que la diferencia de 44.000.000 corresponde a lo que el banco reservó para su propia cartera. Tanto no es exacto el argumento del señor diputado, que el gobierno hizo una nueva emisión de 100.000.000 de pesos, dado el exceso de demanda que hubo en ese momento.

Si eso se correlaciona con el éxito de nuestra conversión, si se agrega que la tasa del interés era del 6 % en 1931 y ha sido bajada al 3 % en la actualidad, incorporándonos a la categoría de naciones que pagan escasa tasa de interés, se puede decir que el inversor argentino tiene confianza no voy a decir en su gobierno, pero sí que la tiene en la propia capacidad del país y en el manejo que de sus fondos hace el gobierno.

Sr. del Carril. — Pero me parece contradictoria la baja del interés con la política anticíclica a que se refiere el señor diputado.

Sr. Cooke. — Absolutamente, señor diputado, porque ese no es dinero que sale a la circulación, sino todo lo contrario. Es dinero que se absorbe. Y, sobre todo, que la política del dinero barato —ya lo he dicho, pero no sé si el señor diputado estaba presente—, es favorable cuando se puede hacer en las condiciones actuales en que por medio de la nacionalización de los depósitos, el

banco puede impedir que los mismos sean invertidos en un exceso de crédito. De esa manera el gobierno favorece el crédito en cuanto éste sea para incremento de la producción, y no vaya a incidir sobre el fenómeno inflacionista.

Sr. del Carril. — Pero el gobierno no necesita de incentivos, si los coloca después en la Dirección de Vialidad, o en las cajas de jubilaciones, por ejemplo, como es el caso de la colocación de los últimos empréstitos.

Sr. Cooke. — Yo me estoy refiriendo a la conversión de la deuda.

Sr. del Carril. — Con respecto a la absorción, que se produzca en los títulos de empréstito, yo digo que no le puede interesar al gobierno si lo lanza a la circulación.

Sr. Cooke. — A mí no me interesa defender los aspectos teóricos de una deuda contratada hace muchos años, pero sí me interesa destacar la confianza del público en la inversión, ratificada al haberse hecho la conversión de la deuda del 4 al 3 por ciento.

Sr. Zara. — La conversión no ha sido total y los saldos que quedan gravitan...

Sr. Cooke. — Lo que ha quedado es un saldo de 74.000.000 de pesos, sobre casi 4.000.000.000 de pesos.

Sr. Rumbo. — Es el 2 por ciento del monto total.

Sr. Zara. — La conversión no es por la confianza pública.

Sr. Cooke. — De acuerdo a las cifras oficiales que ha dado el gobierno, sobre un volumen de 4.000.000.000 de pesos, solamente 72.000.000 de pesos no han sido reconvertidos. El porcentaje es mínimo. Y podrán verse los títulos del 3 ½ % cotizados casi a la par, y los del 4 % arriba de la par.

Sr. Zara. — Entre los cuales hay que contar los de las cajas de jubilaciones.

Sr. Cooke. — Que siguen un régimen aparte, lo que es perfectamente lógico.

Sr. Zara. — Y hay que agregar los 1.600.000.000 de pesos de las cédulas hipotecarias, como lo dije y ratifico después de la observación del señor diputado del Carril, que fueron rescatados y no convertidos y que han gravitado sobre la inflación.

Sr. Cooke. — ¿Qué tienen que hacer las cédulas hipotecarias con lo que yo estoy exponiendo?

Sr. Zara. — Tienen que hacer con el fenómeno inflatorio, porque es dinero que ha pasado a mano de los particulares, que no ha tenido incentivos útiles y están gravitando en la economía argentina.

Sr. Cooke. — Yo no tengo las cifras del porcentaje de rescate de las cédulas hipotecarias.

Sr. Zara. — Son 1.600 millones de pesos.

Sr. Cooke. — No he visto las estadísticas, no obstante que las he buscado. Pero en cualquier

caso, yo igual soy partidario de la reconversión...

Sr. Zara. — Ha sido rescate y no conversión de la deuda.

Sr. Cooke. — Efectivamente. Aun cuando aumente en 1.600.000.000 de pesos el dinero circulante, ha de traer aparejadas muchas más ventajas con la rebaja de la tasa del interés y si a eso se suma las tarifas diferenciales en materia de interés que próximamente deberá entender el Banco Hipotecario de acuerdo a su nuevo estatuto, veremos que el incremento de la vivienda obrera, de la colonización y de la producción prontamente han de superar en muy pocos meses los perjuicios que pueda causar ese aumento de 1.600.000.000 de pesos.

Sr. Zara. — Todo eso no sale del terreno de los buenos propósitos.

Sr. Cooke. — No, señor diputado, no se trata de buenos propósitos, sino de actos que se van realizando.

Sr. Zara. — El Banco Hipotecario hasta este momento no ha reducido la tasa de interés para los préstamos.

Sr. Cooke. — Recordará el señor diputado que en los documentos oficiales se decía que bajo ningún concepto, y se daban las razones, podía entrar a jugar inmediatamente la rebaja de la tasa de interés, y que debía pasar algún tiempo antes de que se hiciera efectiva. No se extrañen los señores diputados, y espero que muy pronto los hechos me darán la razón, si en estos días se anuncia la rebaja de la tasa de interés y el funcionamiento de las tasas diferenciales.

Sr. Zara. — Ya es tiempo de eso.

Sr. Rumbo. — No se puede juzgar intenciones tampoco.

Sr. Cooke. — Lo que pasa es que los señores diputados tienen el concepto de que este es un gobierno que lo único que quiere hacer es fomentar la inflación y necesita recibir el dinero a torrentes. El señor diputado parte de la base que el gobierno está procurando por todos los medios sumir el país en la miseria y ese concepto a sido fomentado por la literatura opositora que ahora nos hace afirmaciones como las que acaba de hacer el señor diputado, en el sentido de que una demora prevista en la aplicación de las nuevas tasas es una mala política del gobierno.

Sr. Zara. — Pero el asunto ha sido muy claro, señor diputado. Se hizo el rescate de las cédulas por 1.600.000.000 de pesos, que fueron a los bancos en momentos en que se nacionalizaron los depósitos y entonces había disponible para el gobierno y para sus apremios fiscales. El asunto es muy sencillo; no se necesita ser gran financiero para saber que los pequeños inversores en esos títulos, que tienen gran confianza en ellos, están con los pesos sin saber en qué invertirlos y sólo recurren al arbitrio de com-

prar bienes inmuebles. Es sabido el fenómeno que ocurre cuando sube la propiedad inmobiliaria: suben todos los valores.

Sr. Cooke. — El señor diputado trae argumentos ajenos al asunto. Si el gobierno estuviera necesitado de esos 1.600.000.000 de pesos, en el supuesto caso de que fuera así, eso no tendría nada que ver con la política financiera del gobierno, sino que es una cuestión a debatir con el ministro de Hacienda, con respecto a los gastos e inversión de dinero por parte del Estado. Pero en modo alguno pueden los señores diputados exponer semejantes argumentos para demostrar que el sistema del Banco Hipotecario, en cuanto a la reducción de la tasa del interés, es malo.

Sr. Zara. — Todavía no lo sabemos porque no se ha producido. El Banco Hipotecario ha recibido títulos del Banco Central al tipo del 2 y $\frac{3}{4}$ %, y los prestatarios siguen pagando el 4 % como antes.

Sr. Cooke. — Efectivamente; pero cuando se hizo la reforma del Banco Hipotecario, ya anunció el gobierno que durante algunos meses no entrarían a funcionar las tasas menores. Esa era una contingencia prevista, porque no es una operación sencilla que se puede hacer con sólo tomar lápiz y papel; pero digo al señor diputado que aun admitiendo esos resultados en lo que se refiere al rescate de las células hipotecarias, el beneficio que va a traer la inversión de la diferencia de la tasa del interés en el fomento de la vivienda popular, el fomento de la colonización y el empleo de materiales de trabajo, eso sólo ya bastaría para compensar aún una cifra sideralmente superior.

Sr. Presidente (Guardo). — Le recuerdo nuevamente al señor diputado que ha vencido ampliamente el plazo acordado para hacer uso de la palabra.

Sr. Cooke. — Voy a terminar en breves palabras, señor presidente; le ruego que me permita hacerlo.

Sr. Presidente (Guardo). — Es que el señor diputado hace casi dos horas que está hablando.

Sr. Cooke. — Para terminar voy a pronunciar muy pocas palabras.

Les he dicho a los señores diputados que si iba a intervenir en la discusión de la política financiera del gobierno, era por la extraordinaria confianza que tengo depositada en este gobierno a la luz de su actuación en esta materia. Les he dicho que para mí y nuestro sector, no se trata de una mera reorganización institucional o funcional, sino que significa la base de la transición de nuestra anterior economía colonial hacia una economía propia. Les he dicho de todas las ansias de la conciencia económica nacional, que recién ahora y por primera vez ha aflorado en los últimos años; y de todas las esperanzas que esa conciencia tiene depositada en

ese nuevo sistema bancario. Son muchos años de escepticismo, señor presidente. Fracasada por razones que no he de analizar en este momento, la formación y cristalización de esa conciencia pública en la época de Yrigoyen, ya se había resignado a muchos más años de escepticismo en que se había refugiado la Nación Argentina.

Cuando hablo de conciencia económica nacional no me refiero a la conciencia económica del partido en que milito; cuando hablo de recuperación económica no hablo de recuperación económica en función de un partido, sino en función de lo que ya es un sentimiento nacional que se ha hecho carne en el pueblo argentino. Ningún partido podrá ya gravitar en el escenario nacional si no está imbuido de principios sólidos y firmes de nacionalismo en materia económica. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*) No es que digamos que nosotros hayamos creado esa conciencia. Yo sé que en el sector de la oposición militan hombres que han contribuido a formarla; pero lo que sí les digo es que con nosotros y nuestra revolución, por primera vez desde la época de Hipólito Yrigoyen, la nueva conciencia económica del pueblo argentino ha llegado a ocupar las posiciones del gobierno. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Y mañana podríamos dejar las posiciones públicas, abandonar los cargos del gobierno, porque ya está el ambiente formado para que la mentalidad de los vasallajes no vuelva a predominar nunca más sobre la política argentina. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Creo que las etapas del perfeccionamiento argentino se van cumpliendo inexorablemente; creo que este gobierno es el que ha encarado, con proyecciones capaces de cumplir un ciclo histórico, un proceso de recuperación económica y de soberanía. Y también les digo a los señores diputados que basta con haber podido hacer llegar hasta el gobierno alguna vez esta nueva conciencia económica, para que con ello podamos afirmar que hemos hecho una revolución y que esta revolución tiene proyecciones de absoluta, completa, permanente profundidad. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Ayala López Torres. — Voy a distraer brevemente la atención de la Honorable Cámara, porque creo necesario someter a su consideración algunas observaciones respecto de uno de los decretos leyes sobre los cuales debe pronunciarse la Cámara en la sesión de la fecha.

No haré una exposición doctrinaria en materia de régimen de bancos, porque las finanzas no han sido nunca de mi dedicación. De ellas sólo tengo los principios generales aprendidos en las aulas universitarias.

Entiendo que de acuerdo a la forma en que venimos votando los decretos leyes, al votarse el artículo 1º del despacho, orden del día 173, quedan aprobados globalmente todos los decretos; y considero que sería conveniente que al considerar el orden del día 173, la Cámara resuelva votar en particular y especialmente el decreto ley 14.961/46, porque he de proponer algunas modificaciones que tienden a salvar una anomalía jurídica, de acuerdo con lo que esta Cámara tiene ya votado con anterioridad.

En una de las sesiones del período actual, esta Cámara votó la supresión de los saldos personales del Banco Hipotecario, y resultaría que de aprobarse el decreto 14.961 en la forma redactada, nos encontraríamos con dos disposiciones totalmente opuestas y como el Congreso debe dar leyes claras y firmes para evitar los semilleros de pleitos que podría originar el conflicto de disposiciones, es conveniente que modifiquemos la disposición del artículo 25 del citado decreto, contenido en la página 1624. Dice el artículo 25: «Los que obtuvieran préstamos en virtud de la presente ley, responderán al pago no solamente con los bienes hipotecados que quedarán afectados con un privilegio superior a todo otro, sino también con los demás que le pertenezcan si resulta saldo deudor. En este último caso se observará el orden de preferencia de créditos establecidos por las leyes comunes.»

Concordante con esa disposición, el inciso b) del artículo 39 dispone: «Una vez vendidas las propiedades hipotecadas, el banco queda facultado: ... b) Para exigir en cualquier momento por la vía ejecutiva y contra cualquiera de los deudores, en el caso de ser dos o más, el pago del saldo que quedaren adeudando, según los libros del banco, por capital, servicios, gastos de reparación u otros intereses, etcétera.»

Existe, pues, conforme a estas disposiciones, una contradicción palmaria y evidente con la sanción dada anteriormente por la Cámara respecto a la extinción de los saldos personales. Si la Cámara mantiene su sanción anterior, no podrá ser votado este decreto ley en la forma en que está redactado; si aprobase el decreto tal cual está, ello implicaría un cambio total de opinión respecto a lo ya votado en sesiones anteriores.

No quiero entrar en un mayor análisis de las disposiciones de este decreto ley, que constituye lo que será la nueva ley orgánica del Banco. Veo que en ésta se han repetido algunas de las facultades discrecionales acordadas a esta institución, que se rige ya por una ley de excepción y de privilegio, tal como, por ejemplo, aquella de que una vez subastada la propiedad en una ejecución hipotecaria, para el Banco Hipotecario no existan las reglas comunes y obligatorias de los contratos bilaterales, porque de acuerdo a la citada ley orgánica el remate puede

o no ser aprobado posteriormente por el banco, lo cual constituye un privilegio legalmente inadmisibles.

Tampoco voy a referirme a otra disposición que conocen todos los profesionales que han actuado en asuntos relacionados con el Banco Hipotecario y por la cual el banco no responde en ningún caso por evicción y saneamiento. Esto lo veo reproducido en el artículo 35.

Lo dispuesto en el artículo 38, inciso 5º, reproducción de lo que contiene la actual ley orgánica del banco, autoriza a esto que me parece a mí una enormidad: «Para tomar posesión de la propiedad hipotecada y aprobado que sea por el directorio del banco, éste podrá desalojar inmediatamente a los ocupantes, cualquiera que fuese la causa de la ocupación y con la única excepción del caso en que hubiese contrato de locación aceptado expresamente por el banco.»

Concordante con esa disposición, el artículo 40 dispone que «El banco podrá por sí solo requerir el auxilio de la fuerza pública para tomar posesión del bien hipotecado.» Es sabido que esto es proceder al margen de lo más elemental en materia procesal, pues el auxilio de la fuerza pública debe requerirse siempre previos los trámites del procedimiento judicial.

Cuando la Cámara entre a considerar a fondo el estudio de la ley orgánica del banco, tendré la oportunidad de intervenir en el debate. Por ahora me parece esencial que la Cámara, y sobre todo la comisión, consideren que de aprobarse este decreto ley en la forma redactada dejaríamos sin efecto la sanción dada anteriormente, suprimiendo los saldos deudores del Banco Hipotecario.

Dice también en otra parte uno de los artículos de este decreto ley: «El banco podrá ordenar la venta de los inmuebles hipotecados en los casos previstos por la presente ley, aunque el inmueble se encuentre embargado o ejecutado por otros créditos.» Es conocido por todos los que actuamos en los tribunales, que por la ley orgánica actual del banco, cuando el ejecutante es un tercero, particular o fisco, sigue el juicio hasta llegar a estado de sentencia de remate, pero ejecutoriada la sentencia de remate se procede, únicamente, a la citación del Banco Hipotecario para que ejercite sus derechos de preferencia para la subasta. Si el Banco Hipotecario no ejercita su derecho de preferencia dentro de los sesenta días de notificada la sentencia de remate ejecutoriada, el ejecutante particular saca a remate la propiedad.

Aquí, en cambio, no se pone límite, de modo que nos vamos a encontrar con una facultad extrema. Se le da al banco facultad ilimitada, dentro de las disposiciones vigentes y que van a ser reglamentadas seguramente en igual forma.

Por ello pido se trate separadamente el decreto ley 14.961/46, para introducir las modificaciones a que me he referido, suprimiendo los saldos personales del Banco Hipotecario.

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Frondizi. — Señor presidente: yo debo fundar mi disidencia con el decreto 15.349, sobre sociedades de economía mixta. He estado esperando hasta este momento la palabra de algún diputado de la mayoría que defendiera estas disposiciones legales. Como ninguno de los señores diputados que se han referido al despacho ha defendido el régimen de sociedades de economía mixta que crea este decreto, no me queda otra solución que hablar antes de que se cierre el debate.

Previamente debo hacer algunas consideraciones de carácter general.

Haciendo abuso de las palabras, se ha hablado de estructura económica revolucionaria. Para saber lo que quiere decir revolución no necesitamos, en la República Argentina, recurrir a pensadores extranjeros; nos bastaría recordar a Esteban Echeverría, quien en algún momento memorable de la historia nacional dijo que no debíamos entender por revolución las asonadas ni las turbulencias de la guerra civil, sino el desquicio completo de un orden social antiguo, o el cambio absoluto, tanto del régimen interior, como del exterior, de una sociedad. En el país no se ha operado revolución económica alguna; las bases de sustentación económica continúan siendo las mismas.

He escuchado también que se ha hablado en forma despectiva del liberalismo económico. Quienes así se expresan parece que no recuerdan el papel revolucionario que ha jugado el liberalismo en la economía del mundo, para hacer desaparecer formas feudales que debían necesariamente ser destruidas antes que la humanidad pudiera pasar a estructuras económicas más modernas. Tampoco, cuando se habla de estos temas, debe confundirse algunos excesos del liberalismo económico con principios de ciencia económica que están incorporados definitivamente al acervo de los pueblos civilizados. Pero como no deseo detenerme en este aspecto simplemente teórico, sino entrar al problema de la realidad nacional, tengo que recordar a la Honorable Cámara que el abandono del liberalismo económico en la República Argentina no fué hecho por sector progresista alguno. El abandono del liberalismo económico en la Argentina fué hecho por la oligarquía conservadora para salvarse de la crítica situación que estaba padeciendo. Dicho abandono, realizado después del año 1930, no tiene propósito revolucionario alguno.

Por el contrario, tiene como única finalidad detener el proceso revolucionario a que querían

impulsar las masas argentinas, a las cuales se engañaba políticamente por la vía del fraude.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, don Silverio Pontieri.

Por eso no basta decir, señor presidente, que se es antiliberal en materia económica para vestirse fácilmente de revolucionario.

He sostenido muchas veces que el país no puede seguir desenvolviéndose sobre las bases de las viejas ideas del individualismo económico. He defendido siempre la necesidad de que la economía de la República Argentina cambie su estructura; pero el pasaje, tanto aquí como en el mundo entero, puede hacerse por dos vías completamente distintas: ya sea recurriendo a las normas totalitarias, tan conocidas en el mundo, que se disfrazan algunas veces bajo las formas de un cesarismo burocrático, o recurriendo a procedimientos democráticos. Nosotros queremos un cambio en la estructura económica, pero realizado mediante procedimientos democráticos.

La regulación y planificación económica que exigen las necesidades del país no deben estar en manos de organismos exclusivamente burocráticos, sino que deben ser entregados a órganos en que estén representados todos los sectores de la economía. Así, también, se evitaría el espectáculo de que muchas de las medidas que dictan funcionarios de los gobiernos puedan beneficiar a esos mismos funcionarios en sus intereses particulares, en la industria, en el comercio o en el agro.

No es, pues, exacto el dilema en que se nos ha querido colocar esta tarde; no es exacto que el dilema para la economía argentina sea mantener el régimen de monopolio privado o caer en una burocracia totalitaria. Nosotros queremos la destrucción de los monopolios privados, pero también queremos que la economía sea manejada por el pueblo y con sentido popular, y no por funcionarios y con sentido fiscal. Desde el 4 de junio de 1943 —lo ha demostrado en un aspecto el señor diputado Peña Guzmán—, se toman los planes conservadores en materia económica y se desarrollan algunos aspectos de tipo totalitario.

Las formas simplemente estatistas o totalitarias de la economía y de la política, no son formas de progreso. Son formas del extremismo de las clases conservadoras y reaccionarias argentinas que se niegan a abandonar las posiciones públicas.

Para que aceptemos la organización bancaria se nos ha hablado de que debemos superar una etapa de la economía colonial. Mi opinión sobre el Banco Central, creado por los gobiernos de la oligarquía, es una vieja y pública opinión, y no tengo que rectificar las condenaciones que

hiciera en su hora. Fué un eslabón del sistema de sometimiento económico que se estuvo tramando dentro de la República.

Quiero decir a los señores diputados que creen que porque se ha dictado este decreto nacionalizando el Banco Central la economía argentina ha dejado de ser una economía semi-colonial, que están absolutamente equivocados. No basta un decreto, no basta una ley, no basta una Constitución, para transformar la economía de un pueblo. El régimen jurídico tiene que ser expresión de la realidad económica y no es necesario muchas veces que se dicte una norma jurídica para que la economía se transforme. Y es inútil que se dicte una ley diciendo que ésta es una sociedad con una economía tal o cual, si la estructura económica de fondo no ha sido modificada.

Lo que necesita el país es desarrollar el grado de potencialidad económica; lo que necesita el país es reconocer que el pasaje del sistema económico semicolonial a formas de economía libre, de emancipación argentina, no será el fruto de la acción de este o de aquel gobierno, sino que será el fruto de los hombres que trabajan todos los días en los campos y en las ciudades.

Se ha dicho acá que para emancipar la economía argentina se necesita recurrir a ciertas formas estatistas. El estatismo o el totalitarismo en economías de pueblos poderosos se transforma en un sistema económico imperialista. Es el caso de Alemania. Pero los países de economía débil, como el nuestro, si se entregan a formas totalitarias o estatistas, seguirán sirviendo a los intereses de los grandes monopolios extranjeros. A lo sumo, podrán pretender descargar parte de sus dificultades sobre los países más débiles.

Hemos escuchado en los últimos tiempos muchos discursos anticapitalistas, pero se olvida lo que decía hace un momento: que el capitalismo es una estructura económica y por eso, pese a todos los discursos que hemos escuchado en el país y en esta Cámara, las formas capitalistas se mantienen en la actualidad. Lo que puede haber, y lo que hay, es un desplazamiento de algunos sectores capitalistas a otros sectores capitalistas internos, pero sin alteración económica alguna de fondo.

Se nos ha recordado aquí que en los últimos años han manejado la economía del país los abogados de los grandes intereses capitalistas. Nosotros hemos combatido duramente esa acción de los capitalistas que manejaban la economía por intermedio de mandatarios; pero ahora ya no ocurre en gran escala que la manejen los abogados de los capitalistas; ahora, la economía del país en grandes sectores está manejada directamente por los mandantes, es decir por capitalistas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

En el aspecto económico y en el aspecto político existe un simple «cambio de guardia.» De la oligarquía ilustrada pasamos a la oligarquía fraudulenta, y del militarismo prusiano que intentó implantar el general Uriburu, pasamos a una oligarquía de burócratas. Yo no puedo dejar de recordar la definición que dió el ex ministro de guerra inglés Hores Belisha, después de visitar la República Argentina, no hace mucho tiempo. Dijo, refiriéndose a los terratenientes argentinos, estas palabras que quedarán seguramente en la historia del país, como una definición del proceso político: «La clase de los estancieros cometió el error más grave al no dedicar a sus hijos a las carreras administrativa, eclesiástica o militar.»

Para justificar los puntos de vista generales que he expuesto, yo podría tomar los ejemplos. Podría referirme al problema de la reforma agraria, para demostrar cómo estos decretos leyes que estamos considerando, dan en realidad un paso atrás al haber hecho desaparecer el régimen creado por la ley 12.636, para entregar el manejo de esta ley agraria a un organismo burocrático como es el Banco de la Nación. Me felicito de que sobre este aspecto exista un orden del día que lleva la firma de los diputados de la mayoría y de la minoría, que seguramente ha de ser aprobado por esta Cámara dentro de pocos días para anular la monstruosidad económica que significa pretender hacer una revolución agraria con empleados de banco. Se nos habla de la reforma agraria, de que la tierra será para el que la trabaja, pero se sigue una política financiera que imposibilita toda reforma agraria, porque la reforma agraria es imposible cuando los precios de la tierra han llegado a límites insospechados en la economía del país. Para que haya reforma agraria se necesita que la tierra sea barata.

Pero lo que pone en evidencia con mayor claridad los errores y las desviaciones y las claudicaciones en materia económica, es este decreto 15.349 sobre Sociedades de Economía Mixta. Este es un decreto incompleto que contiene principios peligrosísimos. Para mí es de extraordinaria gravedad este decreto, porque indica evidentemente que el gobierno se ha decidido por una política favorable a las empresas mixtas, incluso con los grandes capitales monopolistas.

Cada vez que en la historia de la República se quiere investigar los motivos de determinada orientación del régimen jurídico, económico, o de la vida política argentina, la acción de los grandes capitales monopolistas será un hilo conductor que difícilmente nos hará equivocar. Por eso, para saber por qué el gobierno ha dictado este decreto sobre Sociedades de Economía Mixta y para saber por qué el gobierno se ha decidido por una política favorable a este tipo de

sociedades, será necesario investigar la acción de los grandes capitales extranjeros monopolistas desde 1930 en adelante.

Hemos dicho los radicales en esta Cámara, que no somos enemigos de los capitales extranjeros cuando ellos vienen a servir al desarrollo de la economía, pero que los combatiremos cuando pretendan detener o dirigir nuestro desarrollo. Debo recordar que cuando hablamos de las demasías de los capitales extranjeros en el país, no repetimos el lenguaje del pronunciamiento militar, ni las palabras de la doctrina extranjera. Hace ya más de 41 años, la Unión Cívica Radical, después del fracaso del movimiento revolucionario de 1905, dió al país un manifiesto en el que decía estas palabras definitivas: «El criterio extranjero está habituado a pasar por alto el concepto de nacionalidad soberana y organizada a que tenemos derecho, para sólo preocuparse de la riqueza del suelo argentino y de la seguridad de los capitales invertidos en préstamos a los gobiernos o empresas industriales y de comercio.»

Este es, señor presidente, el concepto que nos está moviendo dentro de la Cámara. Pero ¿por qué motivos los capitales extranjeros, especialmente invertidos en los servicios públicos han conseguido llegar bajo el gobierno fraudulento anterior al 4 de junio y bajo el actual gobierno, al régimen de las sociedades mixtas? En la época en que existía el principio de la libertad económica, se hacían otorgar concesiones y monopolios; no se hablaba de sociedad mixta.

El transcurso del tiempo produce algunos cambios que afectan a los servicios públicos. El atraso técnico, especialmente visible en materia tranviaria y ferroviaria, origina una reducción en las utilidades que obtenían estos servicios públicos, y el Estado inicia una fiscalización creciente sobre capitales, tarifas y servicios. Comienza a ser conciencia pública la necesidad de dictar una ley que regule las concesiones de servicios públicos, y la política de nacionalización de los mismos se popularizan gracias a la acción de muchos hombres que están sentados en este recinto en el sector de la minoría y gracias también a la acción de muchos hombres que han continuado fieles a los ideales democráticos argentinos.

¿Cuáles son, entonces, las soluciones que se le presentan a esos capitales monopolistas invertidos en los servicios públicos? Someterse al control del Estado y traer más capitales para mejorar técnicamente los servicios, o permitir la nacionalización de los servicios públicos retirándose del país. Pero los representantes de esos intereses desarrollan, entonces, en la República una maniobra realmente audaz, recurriendo a una tercera solución: adoptan la sociedad mixta para entrar a formar parte del aparato del Estado. En esta forma dilatan el

proceso de nacionalización en una etapa más, absolutamente innecesaria en materia de servicios públicos, y obtienen toda una serie de ventajas. Aceptan la sociedad mixta en caso de actividades comerciales lucrativas. En caso dudoso, se aseguran un mínimo de interés, gozan de todas las ventajas de las instituciones oficiales, exención de impuestos, etcétera. No pueden ser declaradas en quiebra, desde luego. Se aseguran el monopolio de determinadas actividades, con todas las ventajas que ello implica, eludiendo las leyes de antitrusts. La ley antimonopolista pierde el sentido y de ahí en adelante se seguirá aplicando no a todos los monopolios, sino a los que constituyen las personas que no tengan el privilegio de ser amigos del gobierno para entrar en sociedad mixta.

Pero se llega a conseguir todavía algunas cosas más. Estos hombres que invierten sus capitales en sociedades mixtas, incluso evitan la posibilidad de tener conflictos obreros, porque, como lo he recordado en la Cámara, el artículo pertinente del decreto de seguridad del Estado declara prohibidas las huelgas en las sociedades mixtas, estableciendo que toda huelga en esas sociedades será un delito. Después de casi un siglo de concesiones, se intenta en esta forma otro siglo de sociedades mixtas para que los grandes capitales continúen manejando la economía del país.

No desconozco que algunas sociedades mixtas han funcionado bien y que han sido útiles al país; pero lo que quiero señalar, y a ello me he referido, es al motivo por el cual la sociedad mixta tomó recién auge después de 1930, cuando los capitales extranjeros en el servicio público resuelven adoptarla como forma jurídica definitiva. Bastaría para condenar este régimen de sociedad mixta exhibir ante la Cámara lo que sucedió con la creación de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. Ya sabe el país por qué se creó esa corporación, ya sabe el país que a las grandes empresas que la integraron se les reconocieron capitales extraordinarios que no tenían y se les garantizó una serie de privilegios. Desde el año 1943, hasta la fecha, se le viene haciendo a la corporación toda clase de préstamos para que pueda mantener una situación financiera evidentemente ficticia.

No he de recordar las distintas sociedades mixtas que se constituyen en ese período anterior al 4 de junio de 1943. Cuando se produce este hecho militar y a partir de entonces, se habla mucho de recuperación económica. Se hace la expropiación del servicio del gas, pero poco después cambia la orientación económica en materia de servicios públicos.

Podría referirme a las disposiciones que se han adoptado en materia de aeronavegación y al respecto tengo que reconocer que los decre-

tos sobre aeronavegación en materia de sociedades mixtas son más completos que este decreto general. Podría también recordar el decreto ley que crea el Instituto Mixto de Reaseguros.

Existen dos casos que no puedo pasar por alto. Uno de ellos, es el régimen de la Unión Telefónica. No hace mucho se consideró el asunto en la Honorable Cámara. El presidente de la República, en un discurso pronunciado el 3 de septiembre de 1946, cuando se subscriben los contratos, dijo estas palabras definitivas: «Mi gobierno tenía que incorporar el servicio de teléfonos, progresista y estatal, al sistema nacional de comunicaciones con sus inmensos beneficios para la colectividad, con su seguridad plena para el Estado.» El señor ministro de Hacienda en la misma oportunidad dijo que «en virtud de esta operación el gobierno argentino pasa a ser propietario exclusivo de la empresa, hasta ayer formada por capitales extranjeros». Estos conceptos fueron ratificados aquí por el señor ministro de Hacienda, pero poco más de un mes después el presidente del Banco Central, al dar posesión de su cargo al delegado interventor de la Unión Telefónica, anunció al país que el servicio telefónico sería explotado por una sociedad mixta.

Esto indica que existe el enorme peligro de que toda economía fundamental de la República sea entregada a ese tipo de sociedades mixtas con los grandes capitales del monopolio.

Existe un segundo caso que tampoco debo pasar por alto: es el de los ferrocarriles. Ya se ha de debatir aquí extensamente el acuerdo británico y también en esta materia se ha demostrado que el gobierno actual ha continuado la línea económica trazada en materia ferroviaria por las grandes empresas inglesas y por los intereses de la oligarquía conservadora que manejó el país hasta el 4 de junio de 1943.

Ese acuerdo establece la formación de una compañía, con participación del Estado y de particulares argentinos, para adquirir y explotar los bienes de las compañías ferroviarias británicas. No tengo el tiempo necesario para analizar este acuerdo, que a su hora el país lo ha de conocer. Conviene, sí, recordar que a la nueva sociedad se le garantiza a un interés que no será inferior al 4 por ciento anual del capital emitido; se le asegura también que si el rendimiento neto anual disponible para la distribución sobre el capital inicial, fuese inferior a 80.000.000 de pesos, la diferencia hasta alcanzar dichos 80.000.000 de pesos será costada por el gobierno. También el gobierno argentino se obliga a incorporar 500.000.000 de pesos en efectivo durante cinco años para modernizar el sistema ferroviario.

Yo hubiera deseado llamar la atención de la Cámara y del país sobre el peligro que se cierne sobre otras instituciones fundamentales para

la economía argentina, como ser los Ferrocarriles del Estado y Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Sabemos que la producción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales ha bajado, sabemos que no se nos envían máquinas desde el exterior; que la importación de petróleo se hace con pérdida; y por eso temo que en cualquier momento se nos pida que se abran las reservas fiscales o que se llegue a una sociedad mixta. Todo esto en momentos en que debiera extenderse la acción nacional sobre el petróleo argentino.

Nada diré por ahora sobre el peligro de que este régimen de sociedades mixtas llegue también a los servicios eléctricos dentro de la República.

No tengo tiempo de analizar los inconvenientes de tipo económico que presentan las sociedades mixtas y poner en evidencia todos los errores que contiene el decreto que está a consideración de la Honorable Cámara. Deseo, sí, decir que ni siquiera se han incorporado previsiones que tienen algunas otras leyes —como la que crea la Dirección de Fabricaciones Militares— y el estatuto de la aeronavegación.

El examen a fondo de este decreto pondría en evidencia las debilidades de la llamada política de nacionalización. Las sociedades mixtas son un caso típico. Esta aceptación de sociedades mixtas, como ocurre en materia de aeronavegación, es un signo de nuestra debilidad material; pero existe también falta de energía moral frente a estos problemas.

Se habla mucho contra el capitalismo. Se ha dicho en esta Cámara —lo dicen los hombres del gobierno— que la sociedad mixta es el pasaje de la forma privada de la economía a nuevas formas económicas; pero en realidad, el propósito no es ése. El propósito real es incorporar industrias nacionalizadas a las sociedades mixtas, y de ahí pasar a la industria privada.

Tengo que leer, con profunda pena, en materia de sociedades mixtas, lo que dice esta publicación del Ministerio de Guerra, Dirección General de Fabricaciones Militares. Es sumamente grave. Tengo la esperanza de que el señor ministro de Guerra, o el señor presidente de la República aclaren lo que dice esta publicación a toda página, y en recuadro muy elegante.

Recuerdo a los señores diputados que la Dirección de Fabricaciones Militares incorporó al régimen de las sociedades mixtas incluso algunas actividades industriales vinculadas a la defensa nacional.

Se dice en esta página: «La sociedad mixta es el eslabón intermedio que permitirá el pasaje de las industrias del dominio del Estado al de la iniciativa privada; tal concepto es fundamental en la política seguida por la Dirección General de Fabricaciones Militares, que aspira a que la presencia del Estado en estas activida-

des industriales sea transitoria y se mantenga solamente durante el período de afianzamiento inicial, en cuyo lapso el Estado, aparte de proporcionar a la sociedad mixta asistencia técnica y moral, ha de contribuir a ese afianzamiento mediante el apoyo superior que nace de su misma potestad.»

Esto es sumamente grave. Quiere decir que el Estado va a entrar en las sociedades mixtas en el período inicial, en el período difícil, cuando sólo existen posibilidades de pérdidas; y cuando la actividad industrial esté definitivamente garantizada, se retirará el Estado para dejarla en manos de los intereses privados. De donde resulta que este tipo de sociedad mixta, que es incluso un error, aun cuando se piense honestamente que puede servir como un pasaje de la economía de tipo privado a formas económicas más avanzadas, es un peligro para la Argentina, pues como lo dice esta publicación del Ministerio de Guerra será un medio para que toda la economía industrial que está en manos de la Nación pase a manos de particulares.

Aceptamos todas las transformaciones económicas que el pueblo del país y las necesidades nacionales exigen, pero no aceptamos, en nombre de ninguna bandera y de ningún principio, que la economía argentina se entregue al manejo de un cesarismo burocrático o totalitario que, como he recordado, procura nada más que la cristalización del proceso revolucionario de las masas argentinas.

Se dice que la finalidad es destruir a los monopolios; en cambio, con la política financiera que se está realizando se produce la concentración de las industrias, se liquida al productor libre, se proletariza al pequeño comerciante, al pequeño industrial y al pequeño chacarero. Esa política financiera y económica acelera evidentemente el proceso de concentración de toda la economía nacional.

El resultado será que si esta política continúa desarrollándose quedarán en pie solamente los grandes monopolios privados y las sociedades mixtas constituidas por el Estado y por capitalistas privilegiados, que impondrán condiciones a todo el país. Nosotros no estamos dispuestos a tolerar con nuestro silencio ni a apoyar con nuestro voto ese proceso de concentración y monopolio, que es contrario a los intereses del pueblo y de la Nación argentina. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pontieri). -- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Benítez. — Señor presidente: no he de referirme a las exposiciones de todos los señores diputados de la oposición, porque ya mi distinguido colega el señor diputado Cooke se ha referido especialmente a ellas; sólo quiero hacerlo respecto a la exposición del señor diputado Frondizi, que habló con posterioridad.

El señor diputado Frondizi, aunque contrario político, sabe que guardo por él especiales sentimientos por su reciedumbre de luchador, por su fina cultura jurídica y por su profunda cultura económica. Su hermosa disertación de recién sería, además, eficaz, si no partiera de una petición de principio errónea.

Es exacto que podríamos levantar la voz de protesta contra las sociedades mixtas creadas por el gobierno de la revolución, si ellas hubieran sido instituidas a semejanza de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, si hubieran sido creadas en forma de entregar el gobierno de los capitales que ellas mueven a los propios capitalistas, o si hubieran sido creadas en tal forma que el Estado no utilizase el capital en provecho de los intereses generales y que entregase al capital privado el gobierno de los intereses generales.

Lo único que interesa es determinar si el capital estará constituido en forma de servir intereses particulares o intereses generales, si el gobierno del capital estará en manos de los propios capitalistas o del Estado. Y para destruir totalmente la argumentación del señor diputado Frondizi recordaré que los decretos leyes determinan expresamente —contrariando en esto el régimen de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires—, que el gobierno de la sociedad mixta está en manos del Estado y que éste representa los intereses generales. Todos los decretos a que él se ha referido tienen una disposición terminante en ese sentido: el Estado se reserva el poder de veto contra todas las resoluciones de la sociedad. El Estado no puede desembarazarse ni prescindir de la actividad privada como fuente de desenvolvimiento de la economía de la República, sino que la utiliza para fines del Estado y crea el instrumento necesario para que nunca pueda constituirse en un monopolio agotador de las fuerzas del país, sino para que solamente pueda actuar como fuerza económica al servicio de la Nación.

En los estatutos proyectados para la sociedad que ha de administrar los bienes que fueron de la Unión Telefónica se prevé (artículo 45), como en todos los decretos leyes semejantes, este poder de veto para los representantes del Estado que le da el gobierno permanente de las fuerzas económicas que constituyan la sociedad mixta.

Al informar en general estos decretos leyes, dije que estábamos en una época en que aun no podíamos prescindir de la actividad y del capital privados. Dije que este gobierno no era contrario tampoco al capital privado ni a la actividad privada, pero que sí era contrario a que ellos se colocaran por encima del país y quisieran gobernar a la Nación con su fuerza. Es para evitar eso que cuando se autoriza la creación de la sociedad mixta se da al gobierno

de la Nación el gobierno de la sociedad, lo que es suficiente para asegurar que los fines de la sociedad mixta se han de cumplir en forma que consulten los intereses generales.

Estas previsiones están establecidas en el decreto ley, aunque el señor diputado Frondizi exprese lo contrario.

El artículo 8º especialmente determina que el presidente de la sociedad, o, en su ausencia, cualquiera de los directores nombrados por la administración pública, tendrán la facultad de vetar las resoluciones del directorio o las de las asambleas de accionistas, cuando ellas fueren contrarias a esta ley, o la de su creación o a los estatutos de la sociedad, o puedan comprometer las conveniencias del Estado vinculadas a la sociedad.

Sr. Frondizi. — Seguramente me expliqué mal. Yo no dije que no existiera esa disposición, sino que atacué el régimen de la sociedad.

Sr. Benítez. — Dijo que en este decreto no existen las previsiones...

Sr. Frondizi. — He dicho —y no deseo dilatar más esta discusión— que el decreto no tiene todas las previsiones del régimen de aeronavegación, y estoy dispuesto a demostrarlo.

Sr. Benítez. — Se explica la razón: este decreto es anterior.

Sr. Frondizi. — El estatuto a que me refiero, tiene previsiones que no figuran en el decreto. Eso no puede ser desmentido. Lo que ataco es el régimen general de las sociedades mixtas; expreso mi disconformidad con la opinión del Ministerio de Guerra, pues sostiene que la sociedad mixta es un pasaje de la economía de la industria del Estado a la economía privada. Si este principio se aplicara a la aeronavegación, resultaría que con el transcurso del tiempo todo el transporte aéreo estaría en manos de particulares.

Sr. Benítez. — El sistema cada día se va perfeccionando, y el propio señor diputado lo reconoce, en la afirmación de los intereses del Estado. Esto puede tranquilizar a los señores diputados de la oposición respecto al futuro de las sociedades mixtas.

Ahora hay un problema que yo no comprendo en este planteo que la oposición ha hecho respecto de los decretos leyes. Yo no sé en realidad cuál es el pensamiento económico de la oposición. El señor diputado Santander atacó los decretos leyes porque estatizaban, porque aumentaban el poder del Estado, poniendo en sus manos el gobierno económico, el poderío económico; los atacó porque aumentaban los poderes económicos del Estado dándole el gobierno general de los factores económicos del país.

Sr. Santander. — No al Estado propiamente, sino a un funcionario como es el presidente del Banco Central.

Sr. Benítez. — Cuando el señor diputado lea la versión taquigráfica de sus palabras, comprobará que ha expresado ese concepto.

Sr. Santander. — Aunque sea ése el concepto en términos generales, seguramente va a encontrar su interpretación cabal, porque yo me referí a las facultades discrecionales que se dan a un funcionario: el presidente del Banco Central.

Sr. Benítez. — Se da lectura de todos los discursos de la oposición, salvo el del señor diputado Frondizi; resulta que se ataca a los decretos leyes porque aumentan las facultades del Estado y le dan el gobierno de la economía, rompiendo los cauces del libre cambismo —que en su hora cumplió su finalidad y que como todos los instrumentos, se gasta con el uso y se vuelve inútil cuando las fuerzas que luchan contra él crean los instrumentos de destrucción del sistema.

El señor diputado Frondizi se quejó de lo contrario.

Sr. Frondizi. — No, señor diputado.

Sr. Benítez. — ...se lamenta de que el Estado, en vez de tomar a su cargo sólo el gobierno de la industria, no la realice por sí directamente y que esté pensando que en los casos en que por necesidad —porque nadie nos suministraba elementos para que el Ministerio de Guerra pudiera crear los instrumentos de defensa dentro del país— tuvo que asumir actividades industriales, esté pensando el Estado en devolver estas facultades industriales a los particulares, sometiéndolos al control del Estado.

Sr. Frondizi. — ¿Es decir, que la fabricación de las armas se la vamos a entregar a los particulares? ¡No me haga decir lo que no he dicho!

Sr. Benítez. — No la fabricación de las armas. Pero el señor diputado sabe que es difícil constituir, salvo a un costo elevadísimo, una industria que fabrique tanques solamente, por ejemplo; pero podrían establecerse plantas industriales privadas para la fabricación de automóviles, que, en el momento debido, pueden transformarse, como ha ocurrido en todo el mundo, y especialmente en Norte América, en productoras de armamentos. El Estado argentino, como todos los estados, no puede invertir sumas extraordinarias para constituir una industria exclusivamente para el esfuerzo bélico, porque ese esfuerzo bélico no se realiza continuamente sino que hay que realizarlo con intensidad en el momento en que el conflicto se plantea. Debe tratar, entonces, de acentuar la industrialización por medio de la actividad particular, de modo que esa industrialización privada se pueda mover en beneficio del Estado en el momento en que él la necesite. Esto lo han hecho Inglaterra y los Estados Unidos. Conocemos todos el trabajo de conversión de

sus industrias privadas a los fines del Estado y el esfuerzo de reconversión para que esos establecimientos volvieran a servir la actividad particular.

Lo indudable es que, entre uno y otros discursos de la oposición, hay un extraordinario abismo respecto a este problema. Yo no alcanzo a comprender ni cuál es la razón ni cuál es la verdadera posición que la oposición quisiera que el gobierno tuviera en este problema.

Sr. Frondizi. — Que no maneje la economía la burocracia.

Sr. Benítez. — ¿Quiere que el gobierno, acentuando el estatismo, no sólo controle los intereses económicos, sino que amplíe sus facultades y se haga industrial, o quiere que el gobierno, para no tener gran poder, no sólo deje de ser industrial, sino hasta el gobierno de los medios económicos?

Yo lo explico en algún momento como una discrepancia profunda que puede existir entre los señores diputados de la oposición, que tienen, lo sé, sentimientos, orientaciones y sensibilidad económica muy distintas. Si es así, yo lo respeto y no quiero penetrar en ello, porque no deseo, a través de un debate, ahondar las discordancias ideológicas que puedan existir entre nuestros contrarios.

Sr. del Carril. — Pero coincidimos en estar en contra del cesarismo burocrático. Esto nos une perfectamente.

Sr. Frondizi. — El señor diputado, desde luego, no va a obtener lo que parece desear...

Sr. Benítez. — ¡No! ¡no!, señor diputado. He dicho honradamente mi opinión.

Sr. Frondizi. — Los diputados de la Unión Cívica Radical tenemos opiniones personales pero también tenemos una doctrina radical que respetar; doctrina que no es improvisada, pues se ha ido formando a través de más de cincuenta años de la vida argentina. Esa doctrina, señor diputado, nos enseña a nosotros que los organismos de contralor económico y financiero, deben estar integrados por todos los sectores de la vida económica nacional. En cambio, lo que el gobierno quiere, es que el manejo total de la economía se le entregue a un burócrata que él designa. Contra eso estamos nosotros. Y en materia de divergencia ideológica, señor diputado, vendría que usted mirara a su alrededor para comprobar cómo el bloque de la mayoría es una verdadera Arca de Noé, en materia económica. (Risas.)

Sr. Benítez. — Casualmente, con absoluto respeto por estos problemas internos, he dicho a la Cámara que si la razón fuera esa discrepancia yo ni siquiera la anotaría, porque no creo que sea leal tratar de acuciar las divergencias internas que pudieran existir respecto de cuestiones ideológicas. Y lo he hecho con todo respeto, con más respeto del que saben

tener a veces los diputados contrarios que en cuanta ocasión se presenta tratan de suscitar dentro de nuestro bloque las diferencias ideológicas de origen que puedan existir entre quienes, venidos de muchos campos, han formado hoy una sola fuerza. Han de creer ellos que no han nacido hombres nuevos para formar esta nueva fuerza, sino que han venido de las fuerzas que ya existían en el país.

Es indudable que cada vez que aparece un proyecto del Poder Ejecutivo, que toca el problema económico, si ese proyecto acentúa la intervención del Estado, se levanta en la oposición una voz que clama por la libertad económica y si ese proyecto no la acentúa mucho, se levanta una voz que clama porque no da la absoluta y exclusiva intervención al Estado. Y entonces, yo, como legislador, y posiblemente el gobierno que quisiera encontrar la mayor unanimidad o conformidad acerca de sus iniciativas, ya no sabe qué postura adoptar para no ser blanco de la oposición.

Nada más. (¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.)

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Santander. — Antes de entrar a refutar el discurso del señor diputado Cooke, voy a ocuparme muy brevemente de las palabras que acaba de pronunciar el señor diputado Benítez, en lo que respecta a esta aparente contradicción de los diputados radicales.

Repito lo que expresé en una interrupción reciente. Hemos hecho una apreciación exacta del problema para no confundir nacionalización con estatización y no hemos subestimado la nacionalización en sí, en cuanto se hubiera tomado el camino natural que toman en todas partes organismos nacionalizados de esta índole, pero nos alarma en cuanto acá —y por eso llamé sui géneris a la transformación que se postula—, donde se le dan facultades discrecionales no al Estado, sino a un funcionario como es el presidente del Banco Central.

Tanto es así que tengo la versión taquigráfica, en donde, ampliando ese concepto, he dicho: «No debemos llamarnos a engaño. La nacionalización del Banco Central lleva implícita la facultad discrecional de conferir a los funcionarios encargados de su dirección —que es el presidente del Banco Central—, el control del monopolio del crédito sin limitación alguna para movilizar los depósitos bancarios, intervenir como gestor industrial y comercial y dirigir prácticamente toda la economía nacional.»

Ya ve el señor diputado que no hay contradicción entre lo que yo he dicho y lo que ha expresado el señor diputado Frondizi, sino absoluta concordancia. Y puede tener la seguridad el señor diputado que aunque hubiera algunos matices diferenciales en ciertos aspectos doctrinarios de estos problemas tan serios y fundamentales, nos ha de encontrar siempre

dispuestos a defender los conceptos fundamentales de la democracia, porque dentro de ella, se mueven libremente los principios del partido que estamos representando en esta Cámara.

El señor diputado Cooke reiteró el concepto —y lamento que aunque no esté presente deba referirme a sus afirmaciones— hizo una manifestación jactanciosa al afirmar que estaba dispuesto a rebatir todas las argumentaciones que habíamos hecho en defensa de la tesis que nosotros sostenemos. La verdad es que lo hemos escuchado con toda atención y yo a mi vez, pero sin jactancia, puedo afirmar que el señor diputado Cooke no ha levantado ni destruido uno solo de los argumentos que hemos formulado defendiendo el despacho de la minoría.

El señor diputado daba la sensación de que estuviéramos en presencia de exponer una doctrina completa, que sería la expresión de la revolución de junio. Una doctrina económica con sus conexiones financieras, para concluir seguramente en la doctrina completa como conclusión filosófica.

Yo no sé si esa corriente que él insinuó de humanismo cristiano —si mal no recuerdo la denominó así—, de la misma manera que en otra oportunidad evocó el señor diputado por Córdoba, Bustos Fierro, definiéndose dentro de la filosofía tomista. No sé dónde podrán medirse y apreciarse cabalmente las concepciones doctrinarias de la revolución en materia económica y financiera. Pero sin entrar en ese análisis ni a la búsqueda de esos conceptos y de esa corriente, demostraré que todo se ha hecho improvisadamente, que no se ha seguido ningún plan, que todo se ha hecho sobre la marcha con precipitación, sin cálculo de ninguna naturaleza, con exclusivo criterio político circunstancial.

Voy a citar un hecho pequeño, insignificante, que ratifica el concepto que estoy exponiendo. En el mes de mayo de 1946 aparece un decreto firmado por el entonces presidente Farrell, en el que se establece que sólo existían en trámite —se trata de la emisión de bonos hipotecarios— pedidos para colonización por montos insignificantes y siendo, en cambio, tan numerosos los pedidos de préstamos ordinarios, etcétera, se resuelve autorizar al Banco Hipotecario Nacional para aplicar a préstamos ordinarios la proporción de cédulas hipotecarias argentinas del 4 %, serie 0, reservada para préstamos de colonización. No obstante, a los quince días aparece este decreto revolucionario estableciendo la conversión de las cédulas y reduciendo el tipo de interés, aunque cuidándose, como lo ha señalado el señor diputado Ravignani, de que los deudores del Banco Hipotecario sigan pagando todavía el interés casi punitorio del

4 ½ %, en presencia del bajo interés de los títulos del Estado en circulación.

Yo no sé qué mecanismo especial habría de arbitrase para que esa reducción se realice. Es a mi entender una cosa sencilla y simple. Así como se emitieron los bonos a un tipo de interés bajo, de la misma manera el banco, al vencer los términos establecidos —trimestres o semestres— en vez de recibir el 4 ½ %, que es la tasa fijada, debería reducir las cuotas de amortización y cargas el 2 ½ % para no obtener beneficio a costa de los deudores de acuerdo a los nuevos bonos emitidos.

Hasta ahora eso no se ha hecho. Hasta ahora no se ha pasado del plano de las promesas. Los modestos deudores del Banco Hipotecario están esperando el cumplimiento de la palabra del señor presidente de la República.

El señor diputado Frondizi se ha referido ya a lo que el señor diputado Cooke calificó de traspaso de la economía semicolonial a esta economía que yo francamente no me animo a calificar.

Voy a repetir la pregunta del señor diputado Frondizi. ¿Puede por la sola existencia de estos decretos transformarse nuestra economía? Si éramos, seguiremos siendo un país de economía semicolonial, sin ninguna disputa, por la sencilla razón de que las transformaciones económicas no se operan a través de los decretos y las leyes, ni siquiera a través de la fuerza de las doctrinas, sino que obedecen a un proceso hondo, serio, en que intervienen factores de toda naturaleza, operándose esa transformación cuando ha madurado el proceso histórico de valoración económica.

Al adoptar esta postura, no estamos defendiendo los viejos moldes de la economía. Tampoco defendemos los privilegios de nuestra plutocracia o del capitalismo extranjero. Estamos simplemente encuadrándonos dentro de principios constitucionales, que deben respetarse sobre todas las cosas y propósitos, sin dejar de reconocer que en esta hora de la vida del país y del mundo, es necesario el control del Estado, pero el control que no puede significar en forma alguna la coacción, del discrecionalismo, que establecen estos decretos leyes.

Ha dicho el señor diputado que el presidente Yrigoyen tuvo una iniciativa muy semejante a la creación del Banco Central de la República. Absolutamente, no. Lo que propuso Yrigoyen fué la creación de un banco nacional, especialmente para mantener una sección de crédito agrario, y el Senado no tuvo suficiente fuerza comprensiva como para darse cuenta de lo que hubiera significado su aprobación para la economía rural argentina. Pero ese banco no hubiera nacido con las características de éste, con la reforma.

He dicho que no hay que confundir nacionalización con estatización. La nacionalización en sí es intrascendente. La estatización es lo peligroso y por eso, sobre todo por la falta de control del gobierno y del Parlamento, es que hemos combatido con tanta acritud estos decretos.

El señor diputado Cooke elevó la nota sentimental para llegar casi a la emoción al reclamar el rescate para el Estado de la función de emitir moneda con el nuevo sistema que implantará en el Banco Central. Antes —decía— la emisión de billetes estaba a cargo del Banco Central que no era propiamente argentino; ahora la emisión de moneda estará a cargo del Banco Central, plenamente en manos de argentinos; pero el señor diputado olvida que en países evolucionados, de tradiciones tan interesantes y sugestivas, de una madurez cultural extraordinaria, como en Inglaterra, hasta hace poco tiempo, el banco emisor —que no era el Estado— era el Banco de Inglaterra. Lo mismo ocurría en Francia. Y yo no sé que, por ello, hubo mengua para su dignidad y su grandeza. Por el contrario, si Francia fué vencida por factores y causas circunstanciales, no fué porque la nación no tuviera a su cargo la emisión de los billetes, sino por factores que nada tienen que ver con esto. Inglaterra, dando un ejemplo maravilloso al mundo, supo defender su dignidad, la libertad y la cultura de la humanidad, sin que amenguara su grandeza y su prestigio, porque el banco emitiera los billetes.

En el mes de marzo de 1945 el señor ministro de Hacienda, doctor Ameghino, enviaba una comunicación al presidente del Consejo Nacional de Posguerra relacionada con este problema de la inflación y de la deflación, pues ya se hacía sentir lo primero.

Sugiriendo lo que correspondería hacer para evitar la expansión inflacionista, expresaba: «Considero que antes de recurrir a una nueva revisión de los impuestos actuales —y no obstante, a última hora, se aumentaron los impuestos— el Estado debe agotar todas las posibilidades a su alcance para lograr una reducción de los gastos vigentes y procurar, en esta forma, la conservación de las reservas económicas necesarias para que el país pueda contrarrestar efectivamente las serias dificultades que pueden derivarse de la situación anormal porque atraviesa el mundo. Es indudable que para lograr éxito en estos propósitos resulta indispensable fijar un alto en el monto de los gastos públicos.»

A su vez, el Banco Central, en forma categórica, ratifica en su memoria estos conceptos diciendo: «Del análisis que sobre la experiencia extranjera se ha realizado en el segundo capítulo resulta claro que el criterio con que debe afrontarse la lucha antiinflacionista depende fundamentalmente, cualquiera sea la causa de la

inflación, de la política que se siga en materia de finanzas públicas.»

He aquí dos documentos oficiales, dos expresiones oficiales —del Ministerio de Hacienda y del presidente del Banco Central— en que precisamente se sostiene lo que aquí han expresado los diputados Peña Guzmán, Mántaras y el que habla: que ha contribuido poderosamente a la inflación el exceso de gastos públicos, que ha creado un régimen deficitario crónico.

Ha hablado el señor diputado por la Capital de la nacionalización de los depósitos. No encuentro ni se podrá encontrar una cosa más semejante de lo que se ha hecho aquí, que en las expresiones del doctor Schacht, dictador del Reichsbank, cuando decía: «El único medio por el cual el gobierno puede hacerse de los fondos que necesita, es la colocación de empréstitos. Pero éstos sólo son posibles si los ahorros de la comunidad son confiados al Estado a través del mercado de capitales. El establecimiento de un mercado monetario y de capitales capaz de llevar a cabo tareas del Estado, debe ser el objetivo último de cualquier reorganización.»

La única diferencia entre una cosa y otra es que en Alemania dijeron lo que hacían y entre nosotros no se expresa la finalidad aun cuando el resultado sea exactamente el mismo, puesto que, como ya he dicho, contando con el respaldo del ahorro popular, el gobierno de la Nación ha hecho uso de crédito tan abultado, como los 2.000.000.000, correspondiente a las cédulas hipotecarias, como lo decía el señor diputado Zara, hace un momento.

Como una prueba acabada del peligro que se corre en la labor que ha de realizar el Banco Central o el Instituto de Promoción del Intercambio, protegiendo algunos sectores de la industria, tengo en mi banca la resolución por la cual se establece la forma de acordar créditos por intermedio del Banco Industrial para la compra de semilla de lino, girasol, nabo, maní, a los fabricantes de aceite.

¿Qué significa eso, señor presidente? Que este sector de la industria improvisado, que ya ha recibido cuantiosos beneficios, está realizando una tarea que pesará algún día sobre la economía del país sin compensación alguna para la clase agraria argentina.

Voy a citar un ejemplo. Cuando apareció el decreto sobre precio de lino en el mes de mayo de este año, fijándolo en 30 pesos el quintal, ya se había comprado toda la cosecha, pues los agricultores no podían sostenerse por la causas de todos conocidas y debieron vender el producto de su esfuerzo a razón de 17 pesos el quintal.

Luego, con la industrialización del lino, producido el aceite, el Estado lo compra al precio de 46 pesos. Aun suponiendo que hubieran pagado 30 pesos, de acuerdo con el decreto del mes de mayo, la ganancia resultaría superior a la de los propios agricultores; pero puedo afirmar, ade-

más, con conocimiento de causa, y puedo demostrarlo, que hombres vinculados al Banco Central y al Banco Industrial, que a la vez son industriales del aceite, han obtenido ganancias fabulosas y son precisamente por la resolución referida, los beneficiarios de los nuevos créditos que se autoriza otorgar al Banco Industrial. ¡Muy bien! ¡Muy bien!)

Se ha vuelto a hablar, aunque en una forma trasnochada, sobre la significación que nosotros le hemos dado al traspaso de la deuda externa a deuda interna. Hace aproximadamente cuatro meses que se produjo el debate en la Honorable Cámara y, matando un poco el entusiasmo de los señores diputados, llegamos a convenir con el señor ministro de Hacienda en que se trataba de una operación intrascendente, en relación a las proyecciones que querían darle los señores diputados.

Dije en mi primera exposición que ese episodio recordaba este otro de la nacionalización porque, para mí, la nacionalización del Banco Central no constituye ninguna medida revolucionaria. Dije en aquella oportunidad, que no criticamos en sí la operación. En buena hora que la deuda externa haya desaparecido como tal, aunque no ha desaparecido para el Estado como deuda, puesto que sólo se trata de una transferencia. Esos papeles tendrán que ir al mercado bursátil y algunos consorcios tendrán que adquirirlos. De manera que cuando he dicho que se trata de un simple cambio de mano, he dicho la verdad: y en eso técnicamente coincidió conmigo el señor ministro de Hacienda.

Muchas veces olvidamos las cosas que ocurren en la vida interna del país, para criticar o para aplaudir lo que ocurre fuera de él. Cuando, con palabras inflamadas, el señor diputado Cocke hablaba en forma despectiva del capitalismo foráneo, del imperialismo, yo, con mi pensamiento, me trasladaba a Paraguay, Chile, Venezuela, Bolivia, para tratar de percibir cuál sería el pensamiento íntimo de los hijos de cada uno de estos pueblos en presencia de la apertura de bancos argentinos en las capitales de cada uno de esos países. ¿Acaso por este hecho hemos de transformarnos también nosotros en imperialistas? ¿Tendrían razón los bolivianos, los paraguayos, los chilenos, los peruanos, si lanzaran a nuestro rostro ese epíteto, en cierta manera infamante, acusándonos de que estamos alentando una política imperialista? Absolutamente no. Sería una cosa injusta porque, aun cuando desconocemos los verdaderos motivos de la política que sigue en ese sentido el Poder Ejecutivo, tenemos la seguridad de que el pueblo argentino en manera alguna ha de practicar esa política de absorción con ninguno de los países hermanos. Será una contribución de esfuerzo de la economía argentina, en ayuda y solidaridad, por el espíritu con que

nos debemos confundir todos los pueblos de América, pero nada más.

Y ¿qué podríamos decir del empréstito a España? ¿Acaso —aun con todos los reparos que nos merece el actual gobierno de España, porque en nuestro concepto no es la expresión del pueblo español—, acaso existe alguna disminución —aunque haya o no solidaridad política entre un gobierno y otro— cuando el gobierno argentino le acuerda un empréstito? No.

De la misma manera, señor presidente, cuando hemos recurrido antes de ahora al mercado internacional y cuando se nos han acordado esos empréstitos, ha sido sin mengua de la dignidad y de la grandeza moral del Estado argentino.

Pero ocurren cosas paradójales en este ciclo de la revolución social de los señores diputados. Si se tomaran el trabajo de hacer un estudio sobre la memoria de impuestos a los réditos se encontrarían con el fenómeno curioso de que han aumentado los millonarios argentinos. Pongo a disposición de los señores diputados las cifras por las que habrán de comprobar, que desde 1943 hasta la actualidad, los millonarios que han pagado impuesto —y ya sabemos lo que se pueden hacer para eludirlos—, han aumentado en forma considerable.

¿Qué es lo que ocurre en el otro aspecto de la política social que tanto exaltan los señores diputados y que está íntimamente vinculado a la economía del país? Una cosa alarmante, y que tengo la obligación de denunciar. Quiero decir que a pesar de que han aumentado las fábricas y explotaciones industriales en esta improvisación a que las circunstancias nos llevaron desde el año 1939, a pesar de que el campo se está despoblando en un éxodo alarmante hacia los grandes centros industriales, sobre todo a esta gran Capital, acuciados por la situación de penuria y de dolor soportado en los años pasados; a pesar de la centuplicación de fábricas, repito, en estos sectores de la economía el rendimiento del capital trabajo ha disminuído desde 1939 a la actualidad. Y eso es grave y alarmante.

Sobre la cantidad de horas de trabajo en la industria —decía una publicación—, se comprueba que a partir del aumento de 3,4 % verificado en 1934 con respecto a 1943, la efectividad de los obreros ocupados, ha ido disminuyendo 0,9 % en 1945, y en 1,5 % en los primeros siete meses del corriente año. Esto es para darle el total de la efectividad de los obreros ocupados. Realizando ambas series, agrega, a los efectos de apreciar la disminución de la efectividad del trabajo de los obreros, se comprueba que marca para 1946 la alarmante cifra del 8,5 por ciento.

Sr. Vischi. — ¿Qué publicación es ésa?

Sr. Santander. — Es un semanario muy conocido y que en cierto modo está de acuerdo

con la actual política del Poder Ejecutivo. Se llama «Economía».

Esto es muy grave. Deben existir factores que justifiquen esta disminución del trabajo hora de los obreros argentinos. Si hay más ocupación, más trabajo y mayores salarios, ¿por qué esta disminución?

El gobierno de la Nación no se ha preocupado de estas cosas, que han de tener consecuencias trascendentales para el futuro económico de la República.

Retomo las palabras iniciales para demostrar que se está improvisando en todo, como lo confirman las estadísticas, no obstante proclamarse que hay que producir. A pesar de ello, el presidente de la República en los considerandos del plan quinquenal asegura para 1951 la mayor cantidad de trabajo hora que deberá aumentarse en el 15 %, lo que significa que tendrá que experimentarse un aumento del 15,5 % para que se cumplan los planes del señor presidente de la República.

Sr. Argaña. — ¿A qué atribuye el señor diputado la disminución de esa producción-hora de los trabajadores argentinos?

Sr. Santander. — Entre otras causas, seguramente, a la disminución de la capacidad productiva de los instrumentos de trabajo y a otros factores que el gobierno podría estudiar para considerarlos.

Sr. Argaña. — Me complace principalmente la primera parte de su explicación.

Sr. Santander. — Continúo.

El señor diputado Cooke terminó por donde debió haber empezado: expresando su solidaridad política con el Poder Ejecutivo, para agregar que iba a dar su voto por la aprobación de los decretos leyes.

Está el señor diputado en su deber y en su derecho, y en manera alguna podríamos hacerle objeto de críticas o de censuras. Cada cual entiendo el cumplimiento de su deber de acuerdo con su conciencia, con la posición política o ideológica en que se coloca.

Tengo la pretensión de afirmar que las exposiciones de la oposición quedan en pie, que no han sido rebatidas. Hemos demostrado la enormidad que significa la transformación del régimen bancario, económico, financiero y fiscal que se concreta en estos decretos leyes, hemos demostrado lo que significa entregar el poderío de la vida económica de la República, no ya al Estado, sino al funcionarismo burocrático.

Quiero agregar que si se desea seguir por una corriente determinada, en buena hora así se haga, transformando los instrumentos legales que sean necesarios; que se reforme la Constitución, que se siga una u otra concepción doctrinaria en materia económica, política o social, cualquiera que sea, aun la más avanzada; pero dentro del cauce de las normas

constitucionales previa consulta popular. Los señores diputados pueden tener la seguridad de que no hemos de alarmarnos.

Sigamos ahora dentro de los principios de la Constitución, que son la expresión auténtica de la Nación, consecuencia de su formación histórica y tendremos así la seguridad de cumplir con nuestro primordial deber como argentinos: ser fieles continuadores de las tradiciones de libertad y democracia en que ellos se inspiran. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Peña Guzmán. — Pido la palabra para una breve aclaración.

El señor diputado Cooke, en su disertación, se ha referido a varios puntos de mi exposición, especialmente a dos. Uno se refiere a la garantía de la Nación sobre los depósitos en los bancos particulares de acuerdo al artículo 9º de la ley 12.156. Efectivamente, el artículo 9º de esa ley dice que gozarán de privilegio sobre la generalidad de los bienes. Pero hay que relacionar esta medida con la fiscalización por medio del Banco Central, de todos los bancos particulares, del contralor que se ejerce sobre la marcha financiera de cada uno de ellos, de las reservas que por ley están obligados a hacer en el Banco Central y de la fiscalización constante y periódica de los inspectores del Banco Central.

Lo que no ha dicho el señor diputado que habló en nombre del bloque mayoritario, es que al tomarse en cuenta todas estas medidas en conjunto, el riesgo de los depósitos del público en los bancos particulares es insignificante.

Con respecto al problema de la inflación, el miembro informante de la mayoría se ha expresado en términos ambiguos. Habló de varios factores que han promovido la inflación y entre ellos el aumento de nuestro saldo favorable en el balance de pagos. Esto es evidentemente exacto. Se refirió a otro más, a la imposibilidad de efectuar las importaciones necesarias para nuestra economía. Pero es evidente que ambas son una misma razón, desde el momento que si no hubiera habido la imposibilidad de importar no hubieran existido los grandes saldos favorables del balance de pagos. La razón de estos grandes saldos estaba precisamente en la imposibilidad de efectuar las importaciones necesarias.

Como sobre este asunto de la inflación existe una confusión en su apreciación, tanto que algunos señores diputados confunden la inflación con la desvalorización de la moneda, debo referirme concretamente a este punto.

La inflación no es nada más que el desequilibrio entre el monto físico total de las mercaderías y el monto total de los medios de pago que incluye, como es sabido, no solamente los billetes en circulación sino también los obliga-

ciones a la vista. Cuando existe este desequilibrio por aumento de los medios de pago, hay un caso de inflación. Nada tiene que hacer con la desvalorización de la moneda, que toma en cuenta en el mercado internacional exclusivamente el monto total de los billetes y la garantía en oro que los respalda, cosa por supuesto totalmente distinta de la inflación.

¿Cuáles son los casos típicos de inflación? Voy a citar tres que son característicos. El primero, que es el caso tradicional, es el que se refiere a una política emisionista del gobierno. Cuando el gobierno, debido en casi todos los casos al exceso de burocracia o de gastos fiscales, tiene déficit en los presupuestos, entonces emite y provoca un desequilibrio entre los medios de pago y las mercaderías. En ese caso, también en el aspecto internacional se provoca una desvalorización de la moneda, puesto que se desequilibra el monto total de los billetes con respecto a su encaje en oro.

El segundo caso, que podríamos llamar de inflación por escasez, es el que se produce por circunstancias especiales, por ejemplo, por sequías continuadas, que provocan una escasez de mercaderías en el consumo interno. No variando la cantidad total de los medios de pago, existe un desequilibrio por déficit de producción. En este caso también tenemos un inflacionismo no deliberado ni fomentado por el Estado, sino por circunstancias especiales que escapan a su control. Pero esto no quiere decir que se desvalore su signo monetario, desde el momento que, manteniéndose constante la cantidad de oro y al mismo tiempo la cantidad de billetes, la divisa monetaria puede estar en un mismo nivel que antes de la inflación. Esta se realiza, entonces, pura y exclusivamente, en la espera interna del país, dentro de sus fronteras.

El tercer caso, que es el que más nos interesa, es aquel en que por circunstancias bélicas internacionales un país no puede importar los productos fundamentales que necesitaria para su producción interna, y por otro lado, al ser productor de materias primas fundamentales para el esfuerzo bélico de los países en guerra, se valorizan sus exportaciones. Los saldos acumulados a su favor en divisas extranjeras, en oro, provocan evidentemente una tendencia a la inflación en el mercado interno, sin que esto quiera decir que haya una desvalorización o una valorización de su divisa.

¿Cuáles son las medidas al alcance de un gobierno para evitar estos tres casos típicos de inflación?

El primer caso se reduce, simple y escuetamente, a que el Poder Ejecutivo reajuste su presupuesto y evite el déficit con lo cual queda anulado el emisionismo.

En el segundo caso, son medidas de fomento de la producción para restablecer el equilibrio

entre las mercaderías y el total de los medios de pago.

Y en el tercer caso, que es el más interesante, porque es el que estamos sufriendo, actualmente, la medida es emitir billetes de absorción, que pueden ser letras de tesorería, bonos consolidados del Tesoro Nacional o certificados de custodia, de oro y divisa. Algunos países, como Chile, no tenían, dentro de su organización de Banco Central, la autorización para emitir estos certificados, que son papeles de absorción, y se encontró ante el problema del exceso de sus saldos en el exterior, sin poderlos absorber en el mercado interno, y recién en diciembre de 1943 se dictó la «Ley Económica», que establece la existencia de esos certificados.

Por eso hemos dicho, con toda claridad, que de haberse emitido esos certificados de custodia de oro y divisas, no hubiera habido ningún problema en el país, puesto que al ser absorbidos los excedentes de medios de pago que provocan esos saldos favorables de los balances de pago, los precios hubieran permanecido a un nivel constante. Entonces, sí, los aumentos de salarios hubieran tenido una significación muy distinta a la actual, porque hubieran sido aumentos reales y no nominales, como ocurre ahora.

La política del gobierno de facto, y que se insinúa con más evidencia en el actual, hace que incumba al Poder Ejecutivo la responsabilidad directa de la inflación, desde el momento que no adopta, por medio de sus instituciones financieras, las medidas a que está autorizado para evitar el exceso de medios de pago en circulación, y no las adopta casualmente por sus déficit de presupuesto y por los excesos de gastos fiscales.

Con esto quería dejar completamente sentado que todo lo que se ha manifestado aquí, por parte de la oposición, no ha sido rectificado en ningún momento por los miembros informantes de la mayoría.

Nada más. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pontieri). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — Dada la forma en que está redactado el despacho, quiero proponer ciertas modificaciones en concreto a algunos de los decretos leyes que están en consideración antes de la votación en general.

Con respecto al decreto 14.957 del año 1946, que está en la página 1594, propondría que en la parte final del artículo 1º se agregara lo siguiente: «y de acuerdo a las superiores directivas del Poder Ejecutivo de la Nación».

Además, propondría que en el artículo 6º del mismo decreto ley se suprimiera el párrafo siguiente: «El presidente sólo podrá ser removido de su cargo por mal desempeño o delito en la ejecución de sus funciones o por crímenes co-

munes, conforme al procedimiento establecido para el juicio político.»

Además, propondría que en el mismo artículo, el término de duración por siete años en el cargo del presidente se redujera a seis años. Considero conveniente esa reducción por cuanto ningún funcionario debe tener una duración mayor en su mandato que el del presidente de la República, tanto más cuanto el presidente del Banco Central puede ser reelecto.

Propondría, también, que se suprimiera del artículo 15, la última parte que dice así: «El gerente general sólo podrá ser removido de su cargo por mal desempeño o delito en la ejecución de sus funciones o por crímenes comunes, conforme al procedimiento establecido para el juicio político.»

También propongo la eliminación de la palabra «superintendencia» en el párrafo tercero del artículo 56, que figura en la página 1606 del orden del día. Según el diccionario enciclopédico la palabra superintendencia quiere decir: «suprema administración en un ramo». Si se mantiene ese término, daría lugar a que la autarquía de los bancos Nación, Hipotecario e Industrial sea un mito. La última parte del párrafo debería ser substituída por la siguiente: «...velará el cumplimiento, por parte de los bancos y demás instituciones incluídas en el sistema bancario argentino, de las respectivas cartas orgánicas y coordinará la acción financiera de los mismos».

Además, propongo suprimir en el párrafo segundo del artículo 3º del decreto 14.960, las palabras «de la Nación Argentina». La acumulación en una sola persona de la gerencia del Banco de la Nación, del Hipotecario y del Industrial en cada provincia, es sumamente peligroso para el régimen institucional de la Nación. La autonomía de las provincias a que me he referido sería un mito, como igualmente la autoridad de los gobernadores de las provincias frente a un funcionario con tal poder.

También propongo suprimir en el primer párrafo del artículo 3º del decreto número 14.961, página 1620 del orden del día, las palabras: «de la Nación Argentina». La acumulación en la persona del gerente bancario, como lo acabo de manifestar, de las facultades de otorgar o negar, aumentar o acortar los créditos personales hipotecarios, comerciales e industriales, de fomento de la vivienda, de fomento de la colonización, etcétera, que corresponden a las sucursales del Banco de la Nación, del Banco Hipotecario, del Banco Industrial y del Instituto de Promoción del Intercambio, significaría crear en cada capital de provincia un personaje de tal poder que anularía la autoridad del gobernador, de la legislatura y del poder judicial. Por ende, la autonomía de las provincias sería anulada por intermedio de ese perso-

naje y por obra de lo que dispusiera y ordenara el Banco Central de la República, pues al concentrarse las sucursales locales de todo el país en las sucursales del Banco de la Nación quedaría automáticamente suprimida la autarquía del Banco Hipotecario y del Banco Central y sometidos a la administración del Banco de la Nación.

En realidad, señor presidente, son simples modificaciones de detalle que pueden ser benéficas a la misma organización del Banco Central.

Solicito a la comisión acepte esas modificaciones.

Sr. Cooke. — Pido la palabra.

Me hallaba accidentalmente ausente del recinto en oportunidad en que el señor diputado Santander hizo una réplica a afirmaciones que yo había formulado. De cualquier manera yo no hubiese reabierto el debate, porque es evidente que tanto la posición del señor diputado Santander y de sus correligionarios como la posición de mi bloque, están perfectamente fijadas y la discusión hubiese sido desde todo punto de vista estéril. Son dos concepciones y dos visiones sobre la marcha de las finanzas de la Nación. Ahí están las leyes, las opiniones emitidas y la acción del gobierno.

Pero hay un punto que me interesa fundamentalmente dilucidar, que se refiere al banco que Yrigoyen quiso crear en 1917. Yo sostengo que sus atribuciones eran tan amplias como las del actual Banco Central de la República. El señor diputado Santander le da un carácter mucho más restringido que el que yo le atribuyo.

Para no hacer un debate y a fin de dejar al juicio de quienes en el futuro puedan leer esta discusión, yo le rogaría a los señores diputados de la oposición que me acompañen en el sentido de que se incluya en el Diario de Sesiones el mensaje y proyecto del presidente Yrigoyen, sobre creación del Banco Nacional, que llegó al Congreso el 25 de junio de 1917. Podrá apreciarse así teniendo en cuenta los elementos de juicio que surjan de esta discusión, el verdadero alcance de aquella iniciativa.

— Ocupa la Presidencia, el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Ricardo C. Guardo.

Sr. Benítez. — Si no hubiera más oradores anotados, pediría que se cerrara el debate porque estimo que el asunto está suficientemente discutido.

Sr. Santander. — ¿Me permite el señor diputado usar de la palabra, para una pequeña aclaración?

Sr. Benítez. — No tengo inconveniente, en que se vote después que hable el señor diputado.

Sr. Santander. — Es lamentable que el señor diputado Cooke se haya referido sólo a un episodio que no tiene ninguna importancia.

Lo que yo puedo asegurarle al señor diputado es que si lee en su totalidad los fundamentos del proyecto de ley del presidente Yrigoyen, seguramente no ha de encontrar las facultades discrecionales que acuerda al Banco Central las iniciativas que estamos discutiendo. No tengo, pues, inconveniente, en que se incorpore al Diario de Sesiones el documento a que se ha referido el señor diputado.

Sr. Cooke. — Es que sobre el fondo del mensaje hay dos interpretaciones. Yo sostengo que el criterio jurídico de Yrigoyen en este punto era exactamente igual al que nosotros sostenemos.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar la moción de cerrar el debate.

— Resulta afirmativa de 73 votos; votan 103 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — Los señores diputados Cooke y Benítez han solicitado la inserción de documentos en el Diario de Sesiones, de que se dará cuenta por Secretaría.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — En la sesión de ayer el señor diputado Benítez solicitó la inserción de informes referentes a régimen bancario y organización económica; por razón de su extensión se requiere una votación de la Honorable Cámara. El señor diputado Cooke acaba de solicitar una inserción que también es extensa, y por ello requiere asimismo una votación de la Honorable Cámara.

Sr. Zara. — ¿De qué informes se trata en el primer caso?

Sr. Benítez. — Se trata de incluir en el Diario de Sesiones los informes con que fueron elevados por el Poder Ejecutivo los proyectos que discutimos.

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar si se insertan en el Diario de Sesiones los documentos a que se ha hecho referencia.

— Resulta afirmativa de 72 votos; votan 105 señores diputados (1)

Sr. Presidente (Guardo). — Se va a votar en general el despacho de la mayoría de la comisión.

— Resulta afirmativa de 72 votos; votan 108 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — En consideración, en particular, el artículo 19.

¿Acepta la mayoría de la comisión las modificaciones propuestas?

(1) Véanse las inserciones solicitadas en el apéndice de esta sesión.

Sr. Benítez. — La comisión solamente acepta — además de la modificación por ella propuesta — la formulada por el señor diputado Ayala López Torres respecto al artículo 99 del decreto 15.344, sobre Banco Hipotecario Nacional, respecto a los saldos deudores, de acuerdo con la sanción de la Honorable Cámara del 22 de agosto de 1946.

Sr. Zara. — ¿Y la modificación propuesta por el señor diputado Mántaras, sobre la prenda?

Sr. Mántaras. — En la oportunidad de expedirme sobre el proyecto en discusión, me referí especialmente al artículo 41 del decreto que legisla sobre la prenda, desde que en la forma en que está redactado lleva implícito la desaparición de la prenda como obligación con derecho real. Se convierte exclusivamente en un crédito común cuando dice: «El que adquiera, a título oneroso, como libre, una cosa prendada, no contrae responsabilidad alguna respecto al acreedor prendario, sin perjuicio de las acciones penales contra el enajenante, que prescribe el artículo 44.»

De mantenerse este artículo, desaparecería la acción persecutoria del acreedor sobre el bien prendado, quedando subsistente sólo la responsabilidad penal.

Sr. Benítez. — La comisión acepta.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Rubino. — Voy a solicitar la modificación del artículo 31 del decreto 15.348/46 sobre prenda.

La modificación tiende a la defensa del gremio de rematadores, en primer lugar; a una mejor administración de justicia, en segundo lugar; y a la protección de los intereses generales de los deudores, en tercero.

Dicho artículo expresa que cuando en el contrato no se haya convenido que el acreedor tiene la facultad de proponer a la persona que realizará la subasta, el juez designará para esto a un rematador, corredor o comerciante que negocie con artículos similares a los que se han de vender.

Solicito que se supriman las palabras «corredor o comerciante que negocie con artículos similares a los que se han de vender».

Sr. Benítez. — La comisión acepta.

Sr. Rubino. — Ante la aceptación de la comisión, ahorro mayores razones, y me felicito de que haya adivinado en parte mis argumentos.

Sr. Presidente (Guardo). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. García Quiroga. — Voy a proponer, con respecto al decreto 14.359/46, que en el artículo 39, segundo apartado, se agreguen las palabras «cuando aquéllos no tuvieran sucursales».

Propongo este agregado porque aspiro a que las sucursales del Banco Hipotecario Nacional existentes en la actualidad en algunas provin-

cias, subsistan, no sean suprimidas como resulta del decreto sobre la carta orgánica del Banco de la Nación por el cual éste se constituye en mandatario de otros bancos.

Ninguna ventaja, absolutamente ninguna, resulta de la supresión de las sucursales del Banco Hipotecario Nacional en las provincias. Estas cumplen una función económica y social que no debemos perder de vista, sobre todo los representantes de provincias.

Por esa razón solicito de la comisión acepte el agregado pertinente en el derecho relativo al Banco de la Nación.

Sr. Benítez. — Señor presidente: La mayoría de la comisión, a la que ya llegaron sugerencias en ese sentido, consideró el punto y resolvió no modificar las disposiciones del decreto ley.

Sr. Presidente (Guardo). — La mayoría de la comisión no acepta.

Sr. García Quiroga. — De todas maneras pido que se ponga a votación oportunamente.

Sr. Benítez. — Propongo que se vote el artículo 1º en una sola votación.

Sr. Frondizi. — La minoría de la comisión, consecuente con el criterio que ha sostenido en otros casos, pide que se vote decreto por decreto.

Sr. Santander. — Deseo saber si la comisión aceptaría incluir en el decreto respectivo, para la formación del directorio del Banco Central, a una representación del Congreso Nacional. Si aceptara la sugerencia, daría forma a la iniciativa.

Sr. Benítez. — El Banco Central y demás instituciones organizadas dentro del sistema de estos decretos leyes son instituciones de orden administrativo. La participación del Congreso en las funciones de esos institutos impediría al Congreso entrar a juzgar libremente los actos cumplidos por ellos, con su propia intervención. Es decir, que no tendríamos la independencia suficiente para ser jueces de los actos cumplidos por esos organismos administrativos.

Por esas razones, la comisión no acepta.

Sr. Santander. — No se trataría de cumplir funciones administrativas, sino de desempeñar una tarea de control, la misma que desempeñan representantes parlamentarios en el seno del Banco de Francia, últimamente nacionalizado, y en instituciones de otros países donde existe la misma organización.

Sr. Benítez. — Si participamos en el directorio, ya no realizaremos sólo una función de control, sino de ejecución. La función de control, de acuerdo con la Constitución, la ejercemos todos los días desde el Congreso.

Sr. Santander. — ¿Y en el Instituto del Intercambio tampoco acepta?

Sr. Benítez. — Tampoco.

Sr. Peña Guzmán. — Pido la palabra.

Quiero significar que el decreto 8.503, de nacionalización del Banco Central, está en con-

tradicción con el decreto relativo a la carta orgánica del Banco Central, pues en el primero se dice que el presidente del Banco Central será designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado. Como los dos decretos que están en contradicción van a ser seguramente aprobados, habría que resolver cuál de los dos va a tener valimiento.

En lo que se refiere al aspecto de control parlamentario, he citado diversos países en algunos de los cuales hasta los propios legisladores forman parte de los directorios de bancos centrales nacionalizados, y en otros son los que nombran todo el directorio del Banco Central, como es el caso de Dinamarca y de otros países.

Sr. Benítez. — La comisión respeta el criterio de los otros países, pero mantiene el suyo.

Sr. Presidente (Guardo). — Corresponde determinar por votación el procedimiento que se adoptará para la sanción del despacho.

El señor diputado Benítez ha propuesto que se vote el artículo 1º a libro cerrado, y el señor diputado Frondizi propuso la votación por partes; para la determinación del procedimiento a seguir, votar por la afirmativa significa hacerlo en favor de la moción del señor diputado Benítez y votar por la negativa significa hacerlo por la moción del señor diputado Frondizi.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 67 votos; votan 107 señores diputados.

Sr. Presidente (Guardo). — La Secretaría va a informar sobre la forma como ha quedado redactado el artículo 1º.

Sr. Secretario (Zavalla Carbó). — La comisión propuso modificar el artículo 9º del decreto 15.350/46, elevando a siete el número de los miembros del directorio y, consiguientemente, habrá que modificar el artículo 10.

Ha aceptado, asimismo, la modificación propuesta por el diputado por Corrientes, señor Ayala López Torres, relacionada con los artículos 25 y 39 del decreto 14.961/46, sobre saldos personales.

Ha aceptado, igualmente, la modificación propuesta por el señor diputado Mántaras, que modifica el artículo 41 del decreto 15.348, y la modificación propuesta por el señor diputado Rubino, por la que se suprimen algunas palabras del artículo 31 del decreto 15.348.

Sr. Presidente (Guardo). — Con las modificaciones de que ha dado cuenta la Secretaría, se va a votar el artículo 1º.

—Resulta afirmativa de 74 votos; votan 105 señores diputados.

—El artículo 2º es de forma.

Sr. Presidente (Guardo). — Queda sancionado el proyecto de ley.